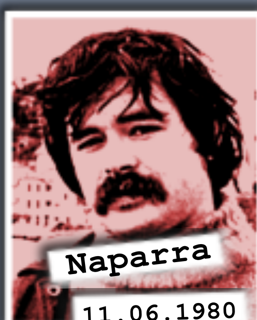
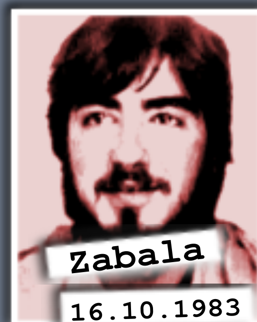
Guerra sucia en Iparralde 1975-1987











Xabier Makazaga

Guerra sucia en Iparralde
1975 - 1987



Xabier Makazaga



Prólogo

El objetivo de este trabajo es el de ayudar a esclarecer todo lo referente a la guerra sucia practicada entre abril de 1975 y julio de 1987 en la parte de Euskal Herria bajo administración francesa, Iparralde.

Me voy a limitar a lo sucedido en Iparralde, pero quiero dejar bien claro que los ejecutores de las acciones de guerra sucia cometidas en dicho territorio perpetraron otras muchas acciones terroristas en los más diversos lugares. No sólo en la parte de Euskal Herria bajo administración española, Hegoalde, sino también en París, Caracas… En todos esos lugares asesinaron y provocaron graves heridas a numerosas personas.

Tampoco quiero dejar sin mencionar el caso de Jean-Louis Larre *“Popo”*, un militante de Iparretarrak desaparecido después de que miembros de esa organización se enfrentaran en las Landas con varios gendarmes, el 7 de agosto de 1983. Uno de los gendarmes resultó muerto, *Popo* escapó a pie, los gendarmes cercaron la zona… y el militante vasco desapareció para siempre. No sucedió en Iparralde, y por eso tampoco lo voy a analizar en este trabajo.

Aparte de limitar el ámbito territorial a Iparralde, también he

decidido limitar el ámbito temporal a esos doce años, entre 1975 y 1987, pese a ser obvio que la guerra sucia ha seguido practicándose, aunque no con tanta intensidad como en el periodo que he decidido analizar.

Durante esos doce años, en Iparralde se produjeron tres campañas de guerra sucia claramente delimitadas y un último atentado aislado, el que costó la vida a Juan Carlos García Goena. Un atentado sobre el que no poca gente ha mostrado saber mucho sin que la Justicia española se haya dignado pedirles explicación alguna al respecto.

En cuanto a las tres campañas de guerra sucia, la primera, iniciada en abril de 1975, en pleno franquismo, duró año y medio, hasta octubre de 1976, y su saldo fue de numerosos atentados con explosivos, algunos intentos de asesinato frustrados y la desaparición del refugiado Eduardo Moreno Bergaretxe *"Pertur"*.

Tras año y medio de pausa sin atentado alguno en Iparralde, llegó la segunda campaña de acciones terroristas, de 1978 a 1981, que fue mucho más cruenta que la precedente: ocho muertos y otro refugiado más desaparecido, José Miguel Etxeberria *"Naparra"*. Durante ese periodo, en el que presidieron el Gobierno Adolfo Suarez y Leopoldo Calvo Sotelo, de UCD, se produjo también una gran cantidad de acciones de guerra sucia en otros lugares (Hegoalde, París, Caracas…) que provocaron numerosos muertos.

La última acción terrorista de esa segunda campaña de guerra sucia en Iparralde se produjo en marzo de 1981 y después hubo un nuevo parón, de dos años y medio, tras el que se inició la tercera campaña, la más conocida de todas, la de los GAL. Una campaña

que se desarrolló entre octubre de 1983 y febrero de 1986, siendo Presidente Felipe González, del PSOE, y que fue todavía más mortífera y eficaz, ya que se valieron de la experiencia acumulada en las dos anteriores: 23 muertos y otros dos refugiados desaparecidos, Joxean Lasa y Joxi Zabala.

Además, asesinaron a Santi Brouard en su consulta de médico pediatra de Bilbo. Fue un asesinato que causó una honda conmoción en Euskal Herria ya que era un destacado dirigente de la Izquierda Abertzale. Cuando lo asesinaron, ejercía como teniente de alcalde en Bilbo y como portavoz parlamentario de Herri Batasuna en la Cámara de Gazteiz.

En esas tres campañas de guerra sucia hubo pruebas flagrantes de la implicación de las Fuerzas de Seguridad, del Servicio Secreto y del Ejército español. Unas pruebas que alcanzaron su cénit en la tercera campaña, a causa de las increíbles chapuzas que cometió el entonces inspector de policía José Amedo.

En un primer momento, las autoridades españolas lograron ocultar las pruebas de su directa participación en el diseño y ejecución de las acciones terroristas perpetradas usando las siglas GAL. Tenían amplia experiencia en ello, porque otro tanto habían hecho en las dos anteriores campañas de guerra sucia, en las que las siglas utilizadas fueron otras, entre las que destacó la del Batallón Vasco-Español, BVE.

Les interesaba muchísimo que todas aquellas acciones terroristas se asociaran a esas siglas, y les sigue interesando sobremanera que la responsabilidad recaiga en “organizaciones terroristas”,

como los GAL y el BVE. Organizaciones que nunca existieron sino como pantallas para ocultar el terrorismo de Estado.

En todo caso, cada vez que salían a relucir pruebas irrefutables de la implicación de significados miembros de las Fuerzas de Seguridad, los Servicios Secretos o el Ejército, las autoridades españolas pretendían que se trataba de agentes que actuaban por su cuenta, sin respaldo alguno de sus superiores, y mucho menos de las propias autoridades.

Otro tanto hicieron cada vez que se pudo demostrar que las armas y municiones empleadas en las acciones de guerra sucia habían sido compradas por las Fuerzas de Seguridad españolas. También entonces negaron toda responsabilidad, aduciendo una supuesta imposibilidad de controlar a ciertos elementos franquistas que intentaban depurar. Una excusa que caía por su propio peso desde el momento en que nunca tomaron medida alguna contra los agentes descubiertos organizando o ejecutando acciones de guerra sucia.

Tampoco las autoridades francesas se mostraron nada diligentes a la hora de tomar medidas contra ellos. Desde el inicio, tuvieron pruebas irrefutables de quién se encontraba tras aquellas acciones terroristas, pero las medidas que tomaron no lo fueron precisamente contra los organizadores de las mismas sino contra quienes las sufrieron: los refugiados vascos. Por eso denuncio que fueron cómplices necesarios de dichas acciones de guerra sucia.

En cuanto a las autoridades españolas, tanto fue el cántaro a la fuente que terminó por romperse, dejando bien claro que la guerra sucia estaba directamente organizada por el Estado. Es lo

que sucedió cuando José Amedo se decidió a contarle al juez parte de lo que sabía y le entregó un documento que había guardado celosamente: el comunicado en el que dieron a conocer las siglas GAL y que sirvió para reivindicar el secuestro en Hendaia del ciudadano francés Segundo Marey.

Se trataba de un comunicado manuscrito y fue bien fácil de probar quiénes lo habían redactado: el entonces Gobernador Civil de Bizkaia, Julián Sancristóbal, y el Secretario General del PSOE en Bizkaia, Ricardo García Damborenea. Ambos fueron encarcelados y tras ellos también acabaron en prisión, entre otros, quienes dirigían el Ministerio del Interior en la época de los GAL: el propio ministro, José Barrionuevo, y el número dos, Rafael Vera.

Todos ellos fueron condenados por haber organizado y ejecutado el secuestro por error de Segundo Marey, pero no pasaron mucho tiempo entre rejas. El Gobierno del PP, presidido por José María Aznar, los indultó a todos.

A raiz de todas aquellas condenas judiciales, quedó en suma evidencia hasta qué niveles llegaba la responsabilidad de las autoridades españolas en la guerra sucia. Una responsabilidad que no cabe duda alguna alcanzaba hasta al Presidente Felipe González, el Señor X que se encontraba en el vértice de la cadena de mando.

Poco antes, éste se había mostrado muy contundente, asegurando que «No hay pruebas, ni nunca las habrá», pero vaya si las hubo. A raudales. Por eso, no les quedó otro remedio que elaborar una nueva versión de los hechos. Una versión tan interesada como falsa según la cual, pese a haber cometido tantísimas chapuzas, obtuvieron el resultado que deseaban obtener con la guerra sucia.

Según dicha versión, las autoridades francesas comenzaron a colaborar con las españolas, tomando medidas contra los refugiados vascos, a cambio de que los GAL cesaran en su actividad terrorista en suelo francés. Ahora bien, es bien fácil de probar que la citada colaboración no se obtuvo en absoluto gracias a la guerra sucia, y así lo expongo en mi trabajo.

En efecto, las autoridades francesas empezaron a tomar múltiples medidas administrativas y policiales contra los refugiados vascos nada más iniciarse los atentados reivindicados usando las siglas GAL. A partir del 10 de enero de 1984, primero practicaron decenas de detenciones, confinamientos y deportaciones de refugiados a terceros países. Después, llegaron las extradiciones, y más tarde las entregas a los torturadores españoles.

Como explico en el libro, todas aquellas medidas estaban incluidas en un acuerdo secreto alcanzado a finales de 1983 por las autoridades franco-españolas, y estoy persuadido de que el citado acuerdo comprendía también la ejecución de acciones de guerra sucia que ambas partes consideraron necesarias para llevar a buen puerto la estrategia que diseñaron.

A lo largo del libro, aporto los datos en que me baso para lanzar tan grave acusación. Unos datos que espero de todo corazón puedan ser contrastados, analizados e investigados por un mecanismo independiente para la averiguación de la verdad absolutamente necesario para ayudar a todas las víctimas a que puedan decir su verdad. Toda su verdad.

Tres campañas

y

un atentado aislado

Primera campaña

1975 - 1976

La primera campaña de guerra sucia en Iparralde se inició con una bomba contra la librería Mugalde de Hendaia, el 7 de abril de 1975, y la Policía y Justicia francesas tuvieron bien pronto no pocas pruebas sobre quién organizaba y financiaba aquellos atentados.

El primer indicio se dio ya el 3 de mayo. Ese día, el inspector de Policía Teodoro Las Heras se negó a mostrar sus maletas ante los aduaneros franceses, rompió la barrera con su coche y se refugió en la aduana de Irun. Más o menos lo mismo que hicieron cinco años después tres mercenarios que acababan de asesinar a dos ciudadanos franceses en Hendaia.

Poco después, el 25 de mayo de 1975, la Policía francesa descubrió la verdadera identidad de un ciudadano español que ingresó herido de bala en un hospital de Baiona con el nombre de Vicente Martínez, de profesión anticuario. En realidad, se trataba de un inspector de policía de la Brigada Político Social franquista destinado en Bilbo, Sebastián Pallega.

El inspector había ido a Iparralde junto con un preso excarcelado a condición de que cometiera atentados contra los refugiados vascos y éste, tras negarse a atentar contra ellos en el bar Mingo de Donibane Lohizune, les contó todo lo sucedido.

La Policía francesa halló en el coche de Pallega pistolas, fotos de refugiados y datos precisos sobre sus domicilios, pero aun así el inspector de la BPS franquista fue conducido hasta la frontera en el coche del Cónsul General de España en la capital labortana. Fue el propio Ministro del Interior francés, Michel Poniatowski, quién tomó dicha decisión tras trasladarse de urgencia a Baiona[1].

El 4 de junio, fue interpelado al respecto en la Asamblea Nacional francesa. La respuesta de Poniatowski: «He pedido que se efectúe una gestión diplomática para invitar a las autoridades españolas a prohibir a sus agentes que vengan al territorio francés». Sin embargo, los incidentes siguieron produciéndose, hubo numerosas pruebas de la implicación del Estado español franquista en la guerra sucia, pero nunca más se supo ni de las gestiones diplomáticas mencionadas por Poniatowski ni de ninguna protesta formal de las autoridades francesas, aunque tuvieron sobradas razones para ello.

Para empezar, tan solo un día después de que el ministro anunciara aquella gestión diplomática de la que nada más se supo, varios mercenarios intentaron colocar una bomba-lapa en el coche del refugiado Josu Urrutikoetxea, en Biarritz. Les explotó en las manos, y además de matar a uno de ellos, Marcel Cardona, causó graves heridas a otro.

La Policía francesa descubrió de inmediato quién los había dirigido: el capitán de la Guardia Civil Cándido Acedo, destinado en

el Palacio de la Zarzuela, residencia del entonces Príncipe Juan Carlos de Borbón. En el juicio, celebrado el 24 de noviembre de 1976 en Pau, salió a relucir que Acedo pertenecía a los servicios secretos y también se habló sobre otro español relacionado con el comando mercenario, el industrial Miguel Sánchez Pajares.

Dicho industrial reclamó más tarde varios millones de pesetas a las autoridades españolas por los gastos que sufragó al comando. Además, dio detalles precisos sobre los viajes que realizó el capitán Acedo junto con el comandante Jesús Conde para contratar a otros mercenarios, precisando que llegaron a ofrecer un millón de pesetas por cada refugiado asesinado.

La Justicia española ni tan siquiera llamó a declarar ni a Sánchez Pajares, ni a Conde ni a Acedo. Y las autoridades españolas tampoco adoptaron medida alguna contra ellos. Era bien previsible, pero lo que no lo era tanto es que la Justicia y autoridades francesas tampoco hicieran nada de nada pese a las flagrantes pruebas que existían en contra de los tres.

Además, los dos últimos siguieron ascendiendo en el escalafón militar. Según el diario *El País*, Jesús Conde era años después coronel[2], el grado anterior a General, que se alcanza tras ser teniente, capitán, comandante y teniente coronel. Cándido Acedo también ascendió hasta el grado de coronel, ocupó importantes cargos en la Guardia Civil y fue mano derecha del jefe de Estado Mayor de dicho Cuerpo, el General Andrés Cassinello, que dirigió en su última etapa el servicio secreto franquista, el SECED.

Fue el sucesor del SECED, el CESID, el que fabricó los famosos sellos de los GAL, y uno de ellos lo recogió precisamente Acedo,

para entregárselo al General Cassinello. Así lo reflejó un acta del CESID que tanto el PSOE como el PP se han negado siempre a desclasificar, como otras muchas actas con datos bien comprometedores, para evitar que tengan validez legal.

Dos semanas después de producirse el atentado frustrado contra Josu Urrutikoetxea, el 19 de junio, intentaron secuestrar en Iparralde a Yolanda Izagirre, compañera de otro conocido refugiado, Jesús Mari Zabarte, y un día después volvió a haber otro incidente con un policía español destinado en Bilbo. A Ángel Arias Alonso le intervinieron una pistola en la aduana de Hendaia, pero a pesar de ello fue también puesto en libertad.

El 28 de junio, se produjo otro atentado que arrojó aún más luz sobre la naturaleza de aquella campaña terrorista. Fue el perpetrado contra el restaurante Udalaitz de Baiona. El dueño anotó la matrícula del coche utilizado para colocar el explosivo y un día después fue detenido François Chabessier, que declaró ante el juez haber recibido explosivos y dinero de un militar español.

Ese caso dio pie a que el semanario del PS, *L'Unité*, publicara un artículo donde se mencionaba que, el 25 de agosto de 1975, «la aduana francesa detuvo en la frontera española un comando de dos hombres, conocidos en las cárceles españolas, cuyo coche contenía armas, explosivos y una lista de 50 personas a eliminar sobre territorio francés. Tras los arrestos, mutismo absoluto»[3].

Tanto el detenido tras el atentado contra el restaurante Udalaitz, Chabessier, como el mercenario muerto en el atentado contra Josu Urrutikoetxea, Marcel Cardona, eran exmiembros de la OAS, una organización terrorista creada en Madrid en 1961 para

oponerse a muerte a la independencia argelina y que, además de causar miles de víctimas, atentó varias veces contra el Presidente francés Charles de Gaulle.

Las drásticas medidas que tomó de Gaulle, incluida la guerra sucia, hicieron que en muy pocos años la OAS dejara de ser un grave problema y el Presidente les concedió ya en diciembre de 1964 la primera amnistía. Una medida de gracia que fue ampliando con rapidez, hasta el punto de que tras el mayo del 68 francés muchos de sus antiguos enemigos mortales de la OAS pasaron a ser sus aliados y a colaborar con los servicios secretos franceses.

No pocos de ellos también trabajaron para los servicios españoles, y está demostrado que al menos uno, André-Noël Chérid, lo hizo para ambos. Encima, simultaneamente. Cometió al mismo tiempo atentados contra refugiados vascos en Iparralde y París, a sueldo de los servicios secretos españoles, y contra intereses argelinos, a sueldo de los franceses.

Así lo confesó André-Noël, hermano del más célebre de los mercenarios de la guerra sucia, Jean-Pierre Chérid, cuando fue detenido en Argelia el 4 de enero de 1976, tras haber atentado contra el diario oficial del FLN, *El Moudjahid*. Lo juzgaron en Argel, el 3 y 4 de marzo de ese año, y volvió a confesar no sólo su participación en ese atentado, sino también en bastantes otros cometidos, tanto contra refugiados vascos, como contra librerias y negocios ligados a dichos refugiados, en París e Iparralde[4].

Otro tanto confesó un mercenario estadounidense detenido junto con André-Noël Chérid y que tenía un amplio historial a sus espaldas. Fue Jay Salby, un mercenario vinculado probablemente a

la CIA[22] por el que se interesaron mucho las autoridades norte-americanas cuando fue detenido en Argelia. Así lo prueban los numerosos cables con referencias al mismo filtrados por WikiLeaks[5].

Según las declaraciones de Salby a la Policía argelina, para cometer los atentados contra los refugiados vascos se sirvieron como cobertura de una empresa llamada *Telma* ubicada en la capital navarra, Iruñea. Una empresa dirigida por un antiguo oficial del Ejercito francés, Jean Rogue, que era la base desde la que operaban Salby y otros mercenarios a los que identificó. Entre ellos, Jean-Pierre Chérid.

Significativamente, ni la Justicia española ni la francesa se interesaron nunca por aquellas declaraciones, pese a que ambos países estaban directamente concernidos y las declaraciones fueron muy precisas en cuanto a los atentados perpretrados, tanto en Iparralde como en París, y los mercenarios que los habían cometido.

Cabe remarcar, además, que la Policía francesa dispuso de pruebas materiales flagrantes sobre la participación de Jay Salby en dos atentados en Iparralde, el 27 de agosto y el 16 de noviembre de 1975. El segundo de ellos, contra el carismático dirigente de ETA *Txomin* Iturbe, dos de cuyos hijos resultaron heridos a causa de la bomba-lapa colocada bajo su coche[6]. *Txomin* volvió a sufrir otro atentado en abril de 1976, en el que resultó ileso tras ser ametrallado, y varios más en años posteriores.

En el atentado del 27 de agosto de 1975, ametrallaron desde un vehículo una furgoneta en la que refugiados vascos y familiares volvían de una manifestación contra las penas de muerte que

acabaría ejecutando Franco un mes después. Dos de ellos resultaron gravemente heridos e internados en el hospital de Baiona.

Una vez localizado cerca de la frontera el vehículo utilizado en el atentado, la Policía francesa pudo saber que había sido alquilado en Barcelona por un supuesto ciudadano paraguayo llamado Gregorio Villagrán Anderson. Precisamente la falsa identidad que utilizaba Jay Salby, y que quedó al descubierto al ser detenido en Argelia[7].

Por su parte, la Policía británica pudo probar que, nueve días antes de ametrallar a los refugiados vascos y sus familiares, Salby había atentado contra la embajada argelina en Londres. El 18 de agosto de 1975, colocó en la embajada un potente explosivo que no detonó debido a un fallo. La huella dactilar de Salby que encontraron en el mismo no dejó lugar a dudas sobre el autor.

Ese mismo día se cometieron otros dos atentados, contra las embajadas argelinas en Bonn y Roma, y la seguridad argelina probó que tras todos ellos estaban los servicios secretos franceses. Otro tanto pudo probar en el caso del atentado cometido por Chérid y Salby contra *El Moudjahid*, y por eso las autoridades de dicho país elevaron una protesta oficial a las francesas.

En efecto, semanas después de ese último atentado, el Ministerio de exteriores argelino dirigió una enérgica nota a París en el que denunciaba «la responsabilidad de los servicios franceses» y llamó «solemnemente la atención del Gobierno francés sobre las graves consecuencias que podrían derivarse de las turbias acciones de los servicios especiales franceses» tratando de desestabilizar el régimen político argelino[8].

Por lo tanto, André-Noël Chérid y Jay Salby actuaron, al mismo tiempo, a sueldo de los servicios secretos españoles franquistas y de los franceses republicanos; en ambos casos, realizando acciones de guerra sucia. Y bien significativamente, ni la Justicia francesa ni la española quisieron saber nada al respecto.

Aparte de la Justicia argelina, la única que se interesó fue la italiana, que también investigó otras acciones de guerra sucia cometidas en los estados español y francés en la segunda mitad de la década de los setenta. Gracias a varios testimonios de neofascistas arrepentidos, obtuvo numerosos datos sobre dichos atentados, e inquirió repetidamente a la Policía, Justicia y autoridades españolas al respecto, pero fue absolutamente en vano.

Otro tanto sucedió cuando la Justicia italiana comprobó que una metralleta Ingram, utilizada por el neofascista italiano Pier Luigi Concutelli para asesinar al juez antiterrorista italiano Vittorio Occorsio, el 10 de julio de 1976, era parte de un lote comprado por la Policía española en USA. Los magistrados italianos enviaron diversas comisiones rogatorias a la Justicia y Policía española, preguntando por dicha metralleta, pero nunca recibieron respuesta alguna.

Según el diario *El País*, el juez de Florencia Pier Luigi Vigna afirmó tener «el recibo de la fábrica norteamericana que vendió esa metralleta, y consta en la factura que se encuentra en nuestro poder que fue comprada por, textualmente, la policía española de Madrid». Y se quejó amargamente de que «Nosotros hemos solicitado en varias ocasiones a la policía española información sobre cómo llegó ese arma a los neofascistas italianos, sin recibir en ninguna ocasión respuesta alguna de la policía y autoridades españolas».

Los periodistas Melchor Miralles y Ricardo Arqués dieron muchos detalles respecto a esas famosas metralletas, más conocidas como Mariettas, en su libro *"Amedo: el Estado contra ETA"*. En concreto, en los capítulos 8, "El terror viene de Italia", y 9, "Vida de una metralleta".

En esos capítulos contaron en qué consistió el mayúsculo error que cometieron «los responsables del Ministerio del Interior y los de los servicios de Información de la Presidencia». Un grave error que los dejó en completa evidencia: «No se dieron cuenta que las "Ingram M-10" llevan una doble numeración, en el exterior del cañón y en el interior del mismo». Debido a ello, borraron la numeración inscrita en el exterior del cañón, pero no la inscrita en su interior, cuya existencia desconocían, y fue gracias a esa última que los jueces italianos dieron con la procedencia del arma utilizada para asesinar al juez antiterrorista Vittorio Occorsio.

Otro par de aquellas metralletas compradas por la Policía española en USA fueron utilizadas por un comando que cometió varios atentados contra refugiados vascos en Iparralde. Un comando que, con toda probabilidad, dirigió un policía español, Ramón Lillo, que pertenecía al servicio secreto franquista, CESED, y que más tarde ocupó importantes cargos con el PSOE, siendo ya comisario.

En 1985, el diario *El País* dio a conocer los nombres y números de teléfono de varios agentes españoles que aparecían en un par de agendas que la Policía italiana intervino al neofascista Pier Luigi Concutelli, junto con la metralleta Ingram con la que asesinó al juez Occorsio. Uno de ellos era Lillo.

Un par de semanas después, el mismo diario sacó a la luz un

informe elaborado por la Comisaría General de Información sobre el neofascista y mercenario italiano Giuseppe Calzona, en el que se recogían declaraciones ante la Policía española de dicho mercenario. También en ese informe se mencionaba a Lillo.

Según Calzona, en 1976 no sólo tomó parte junto a otros ultraderechistas en el asesinato, en Montejurra, de dos militantes carlistas, sino también en un comando mercenario que Lillo dirigió en Iparralde.

En concreto, Calzona manifestó que, tras localizar el comando a Tomás Pérez Revilla *"Tomasón"* y José Joakin Villar *"Fangio",* Lillo «lo comunica a Madrid, recibiendo la orden de atentar contra *Fangio,* pero fallan. Lo mismo les ocurre posteriormente con Pérez Revilla, aunque su mujer es gravemente herida».

En efecto, *Tomasón,* considerado entonces por la Policía española como uno de los dirigentes de la rama "militar" de ETA, fue ametrallado el 21 de marzo de 1976 por un comando que usó dos de las mencionadas Mariettas compradas en USA por dicha Policía.

La rama "político-militar" de ETA se servía entonces de ese mismo tipo de arma, y días después, el 8 de abril, el diario franquista de Donostia *La Voz de España* publicó un artículo, titulado *Enfrentamientos "milis"-"poli-milis"*, en el que se decía textualmente: «Las armas empleadas -"mariettas"- así como la munición -marca "Geko", 9 mm- y la forma de actuar son "modus operandi" de los activistas de la rama "político-militar". Pérez Revilla está reuniendo las evidencias que rodearon el tiroteo al coche donde viajaba, para tomar las represalias oportunas en contra de quienes atentaron contra su vida, la de su esposa -recibió seis balazos- y la

de su hijo de corta edad. Pérez Revilla señala a Moreno Bergareche, (a) *“Perthur”*, como responsable».

Aquel artículo de *La Voz de España* estaba escrito con ese inconfundible estilo que ha llegado hasta nuestros días en la pluma de algunos periodistas a los que les encanta abrevar en “fuentes antiterroristas”. Sobre todo, en la de Jesús María Zuloaga, subdirector del diario *La Razón*. Y ya es casualidad que su padre, del mismo nombre, fuera precisamente quien dirigía entonces *La Voz de España*.

Tres meses después de la publicación del citado artículo, el dirigente de ETA político-militar Eduardo Moreno Bergaretxe *“Pertur”* desapareció en Iparralde, cerca de la frontera, y las Fuerzas de Seguridad y autoridades españolas volvieron a recurrir a la tesis del “ajuste de cuentas” entre miembros de ETA. Un recurso archiconocido en todas las guerras sucias, y que el Estado español ha empleado en varios conocidos casos: Tomás Alba, Santi Brouard, Josean Cardosa...

En el caso de *Pertur*, obtuvieron excelentes resultados, pero en el del atentado contra Tomás Pérez Revilla el montaje se les vino abajo debido al imperdonable error que cometieron: no borraron la numeración inscrita en el interior del cañón de las Mariettas, porque desconocían su existencia.

Tras mencionar ése y otros atentados fallidos, el informe que la Comisaría General de Información redactó en 1984 con las declaraciones del mercenario italiano Giuseppe Calzona dejó constancia de que éste, reclamado en Italia por asesinato, exigió ser puesto en libertad, amenazando con dar detalles comprometedores

para el Estado español en caso contrario. Y, en efecto, no lo extraditaron, sino que fue liberado y nunca más se volvió a saber de él.

La Audiencia Nacional denegó asimismo la extradición de otros cuantos neofascistas italianos reclamados por jueces de su país, argumentando que los asesinatos los habían cometido por motivos políticos. Todos aquellos mercenarios estaban ligados a la guerra sucia, y la Audiencia impidió así que se pudieran esclarecer no pocas acciones cometidas con las mencionadas Mariettas. Y también el secuestro de *Pertur*.

En su biografía autorizada de José Antonio Sáenz de Santamaría, "*El general que cambió de bando",* Diego Carcedo menciona un incidente diplomático relacionado con una de aquellas Mariettas que protagonizaron dos agentes destinados en una oficina secreta del SECED franquista en París.

Los protagonistas fueron un suboficial y el entonces Comandante de Estado Mayor Manuel de la Pascua *"Paso"*, importante agente de los servicios secretos que en 1975 era director del CESED en Bilbo y fue destinado después a la embajada en París[9]. Más tarde, desempeñó el cargo de director de seguridad del Banco de Bilbao durante largos años.

Carcedo dice, en la página 218, que ambos agentes «fueron sorprendidos en un cine recuperando la metralleta Ingram que unos mercenarios habían utilizado en un atentado. La Policía francesa los detuvo y sólo fueron expulsados a España después de largas negociaciones y del cierre de la oficina que mantenían de manera subrepticia». Muy significativo, tanto el incidente como que se mantuviera en secreto durante tantísimos años.

Algunos de los neofascistas italianos por cuyas manos pasaron esas famosas Mariettas se arrepintieron más tarde en Italia y dieron no pocos datos sobre varias acciones de guerra sucia, entre las que se encontraba el secuestro de un refugiado vasco. Un refugiado que trasladaron a una masía catalana, que no ha sido posible nunca identificar, en la que lo torturaron y después hicieron desaparecer, y que no podía ser sino *Pertur*, que fue el único refugiado vasco que pagó con su vida aquella primera campaña de la guerra sucia en Iparralde.

En las dos campañas posteriores, otros tres refugiados tuvieron su mismo horrible final: *Naparra*, Lasa y Zabala. Las familias de los dos últimos pudieron recuperar al menos sus restos, que habían sido enterrados en cal viva para hacerlos desaparecer. Las otras dos familias no han podido tener ni tan siquiera ese consuelo.

La organización de la que era dirigente *Pertur*, ETA (pm), denunció que el mismo día en que desapareció, y hacia la misma hora, tres inspectores de la temible Brigada Político Social franquista se encontraban en un Seat 850 blanco muy cerca de donde se le vio por última vez, a escasa distancia de la frontera[10].

Uno de aquellos policías, José María Escudero Tejada, tuvo estrechos vínculos con dos conocidos torturadores franquistas, el comisario Conesa y Billy el Niño, y estuvo implicado en el conocido Caso Scala, un clásico de la provocación policial: el 15 de enero de 1978, un grupo de jóvenes anarquistas, instigados por un infiltrado policial que trabajaba para Escudero, lanzaron varios cócteles molotov contra la sala de fiestas Scala de Barcelona, pereciendo cuatro trabajadores en el incendio.

Según el BOE del 22 de septiembre de 1976, dos meses después de la desaparición de *Pertur*, Escudero recibió la Cruz al Mérito Policial junto con Francisco Álvarez Sánchez, más tarde archiconocido como *GALvarez*. Sí, el mismo que se responsabilizó del frustrado intento de secuestro de otro dirigente de ETA (pm), Joxe Mari Larretxea. Además, fue condenado, y de inmediato indultado, por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, al que confundieron con otro responsable de ETA.

Ambos policías condecorados ocuparon después puestos de suma relevancia en el Ministerio del Interior en la época de los GAL. Escudero fue jefe de la Brigada Central de Información encargada de la lucha "antiterrorista" que coordinaba *GALvarez* como jefe del Gabinete de Información y Operaciones Especiales.

Volviendo a la primera campaña de la guerra sucia en Iparralde, iniciada en abril de 1975 y que estuvo sembrada de pruebas flagrantes sobre los responsables de organizarla, cabe resaltar que se clausuró a finales de octubre de 1976, con una nueva bomba colocada en el auto de un refugiado, no sin que antes volviera a producirse otro episodio que volvió a apuntar claramente a dichos responsables.

El 18 de octubre de 1976 fue detenido en la aduana de Hendaia el ex miembro de la Legión Extranjera francesa Salvador Grau Lloret. En su coche había, además de dos pistolas, un fusil Mauser y un talonario de cheques robado, una lista de refugiados vascos.

Un mes después, el diario *El País* dio muy significativos detalles respecto a las más que sospechosas gestiones que, dos

semanas antes de ser detenido en Hendaia, dicho mercenario había realizado en el consulado español de Baiona: tras un accidente de coche, en el que causó desperfectos a otro vehículo, se dirigió al consulado donde utilizando una falsa identidad logró, de manera harto sospechosa, que garantizaran el pago de los desperfectos causados en el accidente.

A partir de octubre de 1976, no volvió a haber ningún episodio de guerra sucia en Iparralde durante más de año y medio. Un periodo que coincidió con la drástica disminución de los casos de torturas de militantes políticos vascos. ¿El motivo? Seguramente, la convulsa situación política, que parece obligó a las autoridades españolas a dar las pertinentes órdenes al respecto a los torturadores y a los ejecutores de la guerra sucia.

1975 – 1976	
Ejecutores de la Guerra Sucia en Iparralde	
Gobiernos España/Francia	Franquistas/UDF
Siglas utilizadas	ATE, Triple A… ninguna
Policía, Guardia Civil y Ejército	Sebastián Pallega, Ramón Lillo… Jesús Conde, Cándido Acedo … Manuel de la Pascua, Andrés Cassinello…
Mercenarios	A.-Noël Chérid, Jay Salby, Marcel Cardona, J. P. Chérid, Mario Ricci, Giuseppe Calzona…
Muertos	Marcel Cardona
Armas y municiones	Mariettas compradas por la Policía española en USA
Principales pruebas	Atentado contra Josu, Pallega-preso común, Mariettas…
Consecuencias de la Guerra Sucia	
Acciones Iparralde	Bombas contra librerías, restaurantes…
Secuestro-desaparición	*Pertur*
Secuestros fallidos	Yolanda Izagirre
Muertos en Hegoalde	Dos de Montejurra, Iñaki Etxabe…
Muertos en Iparralde	Varios intentos de asesinato: *Txomin*, Josu Urrutikoetxea, *Tomasón*...
Medidas contra los refugiados	Detenciones, deportaciones en isla de Yeu, confinamientos en el norte de Francia…

Segunda campaña

1978 - 1981

Tras la muerte de Franco y la proclamación como rey de quien éste eligió para sucederle, Juan Carlos de Borbón, el aparato represor de la dictadura permaneció intacto y tanto los torturadores como los ejecutores de la guerra sucia en Iparralde pudieron volver a las andadas en cuanto las autoridades lo consideraron necesario.

Parece claro que volvieron a darles carta blanca prácticamente al unísono, ya que los primeros intensificaron claramente las torturas a partir de la entrada en vigor del Decreto-ley Antiterrorista, el 30 de junio de 1978, y los segundos cometieron su primer atentado mortal contra la comunidad de refugiados políticos vascos dos días después.

En efecto, el 2 de julio asesinaron en Donibane Lohizune a Agurtzane Arregi, ametrallada junto con su marido Juanjo Etxabe, antiguo dirigente de ETA, quien resultó gravemente herido. Fue el primero de una larga lista de asesinatos reivindicados utilizando sobre todo las siglas del batallón Vasco-Español, BVE, y tras él volvió

a aparecer la larga sombra del ejército español[11].

Esta segunda campaña de guerra sucia en Iparralde, que duró casi tres años, tuvo similares características que la tercera, la de los GAL, siendo la principal diferencia la que se refiere al color de los gobiernos español y francés que las protagonizaron. En la segunda campaña, fueron gobiernos conservadores, el de la UCD española y la UDF francesa; en la tercera, socialistas, del PSOE y PS. Y en cuanto a los resultados, fueron bien similares, aunque ampliados y multiplicados en la tercera campaña, gracias a la experiencia adquirida en la precedente.

El atentado más importante de la segunda campaña, iniciada a mediados de 1978, fue el que costó la vida el 21 de diciembre de ese año en Angelu al dirigente de ETA José Miguel Beñaran "*Argala*", que fue el responsable del comando que ejecutó justo cinco años antes en Madrid al que iba a ser sucesor del dictador Franco, el almirante Carrero Blanco.

El atentado contra *Argala* lo perpetró un comando mercenario del que formaba parte un antiguo miembro de la OAS que ya he mencionado en el apartado anterior, Jean-Pierre Chérid, quien participó en múltiples acciones de guerra sucia, hasta que murió, el 19 de marzo de 1984, víctima de un coche-bomba que estaba manipulando para atentar contra varios refugiados vascos en Biarritz.

Tras ello, la Policía francesa localizó su agenda, en la que figuraban varios números de teléfono. Entre ellos, el del sargento de la Guardia Civil Manuel Pastrana, destinado en el Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior, el de un oficial de

la Armada cuya verdadera identidad permaneció secreta hasta una década después y el del neofascista italiano Mario Ricci.

El 9 de mayo de 1976, tanto Ricci como Chérid participaron, junto con otros muchos ultraderechistas de distintas nacionalidades, en el asesinato en Montejurra de dos militantes carlistas. Fue parte de la denominada *Operación Reconquista* y está más que probado que muchos de aquellos ultraderechistas actuaron, antes y después, como mercenarios a las órdenes de los servicios secretos españoles.

También se sabe con plena certitud quién fue el agente de dichos servicios que dirigió a aquellos mercenarios a partir de finales de la década de los setenta. Se trató del oficial de la Armada cuyo teléfono tenía Jean-Pierre Chérid apuntado en su agenda: Juan Manuel Rivera Urruti, conocido por el alias de *"Pedro el Marino"*, que falleció el 7 de agosto del 2004 en Puerto de Santa María.

Rivera Urruti, que nació en mayo de 1930, fue destinado en 1969 al Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y empezó a trabajar en un gabinete especial[12]. En 1977 estuvo en Las Palmas infiltrando al MPAIAC de Antonio Cubillo[13], y posteriormente se responsabilizó de organizar comandos mercenarios para la guerra sucia.

Así lo prueba, para empezar, un muy significativo informe elaborado en 1979 por la Guardia Civil. Un informe que describía con todo detalle cómo intervino Rivera Urruti a fin de que se suspendiera de inmediato una investigación de dicho Cuerpo sobre Jean-Pierre Chérid y otros mercenarios que habitaban con él en un piso de Madrid.

Según el citado informe de la Guardia Civil, la investigación sobre Chérid se inició tras el hallazgo de una bolsa que el mercenario había dejado olvidada en el vestuario del campo de fútbol de Leganés. Una bolsa en la que se encontraron un revólver, que pertenecía a un lote adquirido por la Policía a la fábrica de armas Astra de Gernika, carnés de identidad falsos con su foto, abundantes datos sobre refugiados vascos y una agenda en la que figuraban números de teléfonos de la Seguridad del Estado.

En aquel incriminador informe, se especificaba que fue un agente de los servicios secretos de apellido Rivera, que era entonces capitán de fragata, quien ordenó suspender la investigación, aduciendo que tanto Chérid como los demás mercenarios eran, textualmente, «gente suya». Así lo divulgaron la *Cadena Ser* y *El País*, en 1998, pero aunque para entonces ya se había desvelado la verdadera identidad del "Señor Rivera", pretendieron que se llamaba Pedro Martínez.

Cabe remarcar al respecto que, tras la muerte de Chérid, la revista *Cambio 16* publicó una foto tomada en el aeropuerto de Alicante, donde se veía a Juan Manuel Rivera Urruti *"Pedro el Marino"* en cabeza de un amplio grupo de mercenarios. Entre ellos, estaban Jean-Pierre Chérid y el antes mencionado Mario Ricci. Y también el miembro de la Triple A argentina José María Boccardo, y otro neofascista italiano del que he hablado anteriormente, Giusseppe Calzona.

Pese a aquella reveladora foto, Rivera Urruti pudo preservar su verdadera identidad durante toda una década, gracias a la colaboración de periodistas que pretendieron que la identidad de *"Pe-*

dro el Marino” era la de Pedro Martínez. Una manifiesta falsedad destinada a cubrir al verdadero organizador de la guerra sucia desde la década de los setenta, que nunca fue ni siquiera llamado a declarar por la Justicia española.

Todos aquellos mercenarios, de muy diversas nacionalidades, compartían una ideología ultraderechista y todo indica que fue el almirante Luis Carrero Blanco, considerado seguro sucesor del dictador Franco, quien decidió servirse de ellos para la guerra sucia antes de que ETA lo hiciera saltar por los aires, el 20 de diciembre de 1973, en la calle Claudio Coello de Madrid.

El militante de ETA que activó el explosivo que causó la muerte de Carrero, Presidente entonces del Gobierno, fue José Miguel Beñarán *“Argala”,* y los servicios secretos españoles no pararon hasta tomar cumplida venganza. Lo hicieron, por medio de un comando mercenario que quiso hacerlo saltar por los aires justo cinco años después de que Carrero Blanco saltara a su vez por los aires. Colocaron una bomba-lapa en su auto, en Angelu, pero *Argala* no lo usó ese día, sino al siguiente, el 21 de diciembre de 1978, falleciendo en el acto.

Se trató del segundo atentado de la segunda campaña de la guerra sucia en Iparralde y sus autores fueron los antes mencionados mercenarios, que aparecían en la foto tomada en el aeropuerto de Alicante con Jean-Pierre Chérid a la cabeza, y que cometieron otros muchos atentados. No sólo en Iparralde, sino también en París e incluso en Caracas, donde asesinaron a una pareja de refugiados vascos.

Probablemente, fueron asimismo los autores de varios asesinatos perpetrados en Hegoalde que jamás han sido esclarecidos, como los de Karlos Saldise y Ángel Etxaniz. Y también de un par de atentados cometidos con bombas-lapas, uno de los cuales provocó gravísimas heridas a un matrimonio de antiguos refugiados durante el franquismo: Jesús María Ijurko y Mari Karmen Illarramendi. El otro, felizmente frustrado, fue contra el alcalde de Hernani, Juanjo Uria.

Tras el atentado con bomba-lapa cometido el 21 de diciembre de 1978 contra *Argala*, llegó bien pronto, el 13 de enero de 1979, el que casi costó la vida y dejó gravísimas secuelas a otro destacado refugiado, Joxe Manuel Pagoaga "*Peixoto*". Fue el primero de ese año en el que cuatro refugiados fueron asesinados en Iparralde. Muchos más dejaron también sus vidas en años posteriores.

Justo la víspera del atentado contra *Peixoto*, y pocos meses después de que los españoles encargaran a los franceses 48 Mirage F1 y aviones Airbus[14], el Ministro de Asuntos Exteriores español, Marcelino Oreja, se entrevistó en Paris con su homólogo francés Jean François Poncet.

Pronto se verían los resultados ya que, como volvió a ocurrir cinco años después, tras manifestarse primero la guerra sucia y producirse los dos primeros asesinatos, de inmediato llegaron las medidas administrativas y policiales francesas contra los refugiados.

En efecto, el 30 de enero las autoridades decidieron retirarles el estatuto de refugiados políticos, y el mismo día se produjo una gran batida en la que detuvieron a una treintena de refugiados. Siete de ellos, recién llegados a Iparralde, fueron además entrega-

dos a los torturadores españoles.

Quien poco después sería Ministro de Justicia con Mitterrand, Robert Badinter, era abogado defensor de refugiados vascos[15] y el Partido Socialista francés se manifestó absolutamente en contra de aquellas medidas. Alegó, por ejemplo, que la retirada del estatuto era una limitación del derecho de asilo y una violación flagrante del Convenio de Ginebra[16].

En aquella época, la mayoría de la población francesa no consideraba en absoluto que ETA fuese una organización terrorista y veía a sus militantes como un grupo de jóvenes románticos que luchaban por la libertad de su pueblo oprimido por la dictadura franquista[17]. Una dictadura que a principios de 1979 seguía bien viva en las memorias.

Por eso fueron tan mal vistas aquellas medidas administrativas y policiales a las que siguió poco después, el 21 de febrero, otro nuevo intento de secuestro, el de la refugiada Arantxa Sasiain. Cuando murió Jean-Pierre Chérid, Sasiain lo reconoció de inmediato como uno de los mercenarios que haciéndose pasar por policías franceses la sacaron de su casa, llevándola supuestamente detenida. Ya en la calle, terminó por sospechar de sus captores y se libró de puro milagro de terminar como *Pertur*.

El que no se pudo librar de ser secuestrado un año después, el 11 de junio de 1980, fue José Miguel Etxeberria *"Naparra"*, dirigente de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, CCAA, del que nunca más se ha vuelto a saber, como en el caso de *Pertur*. Tres años después, volvieron a intentar secuestrar a un dirigente de los CCAA, José Luis Salegi *"Txipi"*. Lo intentaron los mismos guardias

civiles del cuartel de Intxaurrondo, al mando de Rodríguez Galindo, que poco después conseguirían secuestrar a Lasa y Zabala.

En cuanto a los refugiados asesinados en 1979, destaca el caso de Justo Elizaran *"Periko"*. El mercenario jefe del comando que lo asesinó, Maxime Szonek, poseía una amplia lista de refugiados con todo tipo de detalles, proveniente de fichas policiales, y reconoció en su juicio haber recibido dinero de la Policía española. Además, la Justicia francesa probó que la munición utilizada en el atentado era de fabricación militar española, y su numeración indicaba que estaba reservada a las Fuerzas Armadas.

Según una pregunta parlamentaria formulada en el Congreso español, en la que se daban amplios detalles sobre el caso, el responsable policial encargado de los pagos al mercenario Maxime Szonek fue el comisario Manuel Ballesteros, conocido torturador franquista que era entonces Comisario General de Información, un puesto clave.

En 1980 volvieron a repetirse los atentados mortales ejecutados por mercenarios y uno de ellos dejó en absoluta evidencia al mencionado comisario Ballesteros. Un atentado en el que tres mercenarios ametrallaron el 23 de noviembre de 1980 el bar Hendayais, frecuentado por refugiados vascos. El ametrallamiento causó la muerte de dos ciudadanos franceses que nada tenían que ver con los refugiados y heridas a otras diez personas. Tras ello, los autores atravesaron violentamente la frontera en un vehículo y mostraron a los policías españoles el número de teléfono de Ballesteros. Éste ocultó la identidad de los mercenarios y ordenó que fueran puestos en libertad.

Además, no sólo quedó en evidencia él, sino también las autoridades españolas; entre ellas, el Ministro del Interior de UCD, Juan José Rosón. Éste reconoció que los mercenarios trabajaban para la Policía española, pero pretendió contra toda lógica que nada tenían que ver con el atentado. Más tarde, ya con el PSOE en el Gobierno, Ballesteros fue primero jefe de Operaciones Especiales y después director del Gabinete de Información. Y cuando murió, *El País* borró de su historial todo su pasado de torturador franquista.

Los dos últimos atentados de esa segunda campaña de guerra sucia en Iparralde, ambos frustrados, se produjeron el 17 y 21 de marzo de 1981 contra dos refugiados a los que las Fuerzas de Seguridad españolas acusaban de ocupar, o haber ocupado, puestos de responsabilidad en ETA.

El primero, cometido en Hendaia con una bomba-lapa, fue contra Mikel Lujua, que salvó la vida gracias a que su esposa descubrió el explosivo. El segundo, en Donibane Lohizune, estuvo dirigido contra Eugenio Etxebeste *"Antxon"* que resultó asimismo ileso. Tres años después, fue deportado por las autoridades francesas. Exactamente lo mismo que le sucedió a *Txomin* Iturbe.

Uno de los mercenarios que atentó contra *Antxon* fue detenido y aunque pretendió llamarse André Pervins era en realidad un ex funcionario de la Dirección General de Seguridad madrileña llamado Vladimir Vit. Murió poco después y sus familiares reclamaron y obtuvieron una indemnización del Ministerio del Interior español.

En el atentado, los mercenarios se vieron obligados a abandonar en su huída un par de pistolas Smith & Wesson que se demostró habían sido compradas en USA por la Policía española, como las

famosas Mariettas de la primera campaña de la guerra sucia en Iparralde. Y unos años después, en la tercera campaña, la de los GAL, volvieron a tener un protagonismo especial unas armas compradas con toda probabilidad por las Fuerzas de Seguridad españolas.

En ese último caso, fue al parecer el entonces comandante de la Guardia Civil Rafael Masa quién compró en Andorra un lote de diez armas, varias de las cuales fueron después usadas en diversos atentados reivindicados usando las siglas GAL.

Masa era un hombre de la máxima confianza del Secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera y estuvo involucrado en los más turbios asuntos: condenado en el conocido caso de torturas de Tomás Linaza, procesado por el asesinato de Santi Brouard, encarcelado por narcotráfico a gran escala…

El dueño de la armería andorrana reconoció a Rafael Masa como el comprador de aquellas armas y aseguró que éste le dio un número de teléfono para que pudiera contactar con él. Un número que se comprobó pertenecía al Ministerio del Interior. Después, como en otras muchas ocasiones similares, el testigo se retractó, pero conociendo la trayectoria de Masa, poca duda puede caber que fue él quien las compró.

Tres campañas de guerra sucia y tres casos de armas compradas por las Fuerzas de Seguridad españolas para llevar a cabo los atentados. En el de las Mariettas de la primera campaña, ni las autoridades ni la Policía española se dignaron nunca responder a los jueces italianos que preguntaron una y otra vez por el arma utilizada para asesinar al juez antiterrorista Vittorio Occorsio. Dieron siempre la callada por respuesta. En cambio, sí que respondieron en relación

a las Smith & Wesson usadas en el atentado frustrado contra *Antxon*, pero la respuesta fue en verdad increíble. No se les ocurrió mejor excusa que la de pretender que dichas armas habían sido robadas de un vehículo policial donde las habían dejado.

Tras aquel atentado fallido contra *Antxon* Etxebeste, las armas de los mercenarios callaron de nuevo en Iparralde, como en 1977. Seguro que algo tuvieron que ver en ello las numerosas pruebas dejadas en esa última acción, pero creo que los factores decisivos fueron otros dos. Por una parte, el atentado del Hendayais, que costó la vida a dos ciudadanos franceses, y lo que sucedió a continuación, que seguro irritó mucho a las autoridades francesas. Por otra, el que considero fue el factor decisivo: el 10 de mayo de 1981, resultó elegido Presidente el socialista François Mitterrand.

A partir de entonces, no volvió a cometerse ninguna acción de guerra sucia contra los refugiados durante dos años y medio: año y medio con UCD en el Gobierno y otro más con el PSOE, que ganó las elecciones de octubre de 1982 por mayoría absoluta. Un largo periodo de significativo silencio durante el que, además de preparar adecuadamente el terreno para reactivar la guerra sucia, decidieron aparcar todas las siglas empleadas hasta entonces para reivindicar los atentados (BVE, ATE, AAA …) y utilizar una sola sigla muy bien estudiada, la de los GAL.

1978 – 1981	
Ejecutores de la Guerra Sucia en Iparralde	
Gobiernos España/Francia	UCD/UDF conservadores
Siglas utilizadas	BVE, AAA, GAE… ninguna
Policía, Guardia Civil y Ejército	Ballesteros, *Billy el Niño*… Félix Hernando, Manuel Pastrana… Rivera Urruti, Sáenz de Santamaría…
Mercenarios	Jean-Pierre Chérid, Calzona, Vladimir Vit, Ricci, Boccardo, hermanos Perret...
Muertos	
Armas y municiones	Smith & Wesson compradas por la Policía española en USA. Munición militar española
Principales pruebas	Atentado contra *Antxon* Etxebeste, Caso Hendayais…
Consecuencias de la Guerra Sucia	
Acciones Iparralde	Algunas bombas en empresas y negocios de refugiados
Secuestro-desaparición	*Naparra*
Secuestros fallidos	Arantxa Sasiain
Muertos en Hegoalde	Cuatro de Alonsotegi, Saldise, Etxaniz…
Muertos en Iparralde	8 (2 franceses, error): Agurtzane Arregi, *Argala, Korta, Periko, Usurbil*…
Medidas contra los refugiados	Tras 2 primeros asesinatos, retiran estatus de refugiado, 30 detenidos y 7 entregados. Fuertes protestas. No hubo más medidas.

Tercera campaña

1983 - 1986

El motivo por el que cesó la guerra sucia en Iparralde cuando Mitterrand fue elegido Presidente parece obvio. El Estado español tenía poco que ganar y mucho que perder si seguía enviando mercenarios a la caza del exiliado vasco, porque la izquierda francesa lo veía con malos ojos, y ello iba a repercutir sin duda de manera negativa en algo esencial para las autoridades españolas: la colaboración del Gobierno francés.

En efecto, esa colaboración les era imprescindible para hacer frente a una muy difícil situación en la que la moral de las Fuerzas de Seguridad era muy baja. Así lo reconoció más tarde el General Andrés Cassinello: «El 80 fue el año de mayor debilidad del Estado respecto a ETA. Fue el año de la desilusión y del desencanto».

Fue en ese contexto cuando el PSOE se puso manos a la obra. Según *El País*, durante el verano de 1982, antes de que dicho partido empezara a gobernar tras obtener la mayora absoluta en las elecciones, una delegación de altos dirigentes socialistas españoles

se entrevistó secretamente en París con el entonces Ministro francés del Interior, Gaston Defferre, y el Primer Ministro, Pierre Mauroy, para conseguir su colaboración en la lucha contra ETA.

Aquello supuso el inicio de posteriores y fecundas relaciones en las que la estrategia a seguir por parte española fue elaborada, según supo *El País* de fuentes del propio PSOE, por dos importantes miembros del partido. Se trató del entonces Secretario General del PSE-PSOE, Txiki Benegas, y del Presidente del PSOE, Ramón Rubial, que ya había apuntado la posibilidad de recurrir a la guerra sucia, poniendo como ejemplo la que practicó De Gaulle contra la OAS.

En todo caso, el que lo tenía muy claro era el General Cassinello, que en septiembre de 1985 dio una conferencia en la que dijo que él también prefería «el terrorismo a la alternativa KAS, la guerra a la independencia del País Vasco». Y resumió su plan de acción en bien pocas palabras: «Es preciso hablar, moverse, confundir, captar, romper, contactar, negociar con las fracciones, romper el todo».

Eso es sin duda lo que ya estaban haciendo desde hacía años y muy especialmente desde que empezaron a aplicar un plan en el que Cassinello tuvo muchísimo que ver y que seguro también aplicaron a la hora de llegar a un acuerdo con las autoridades francesas para combatir más eficazmente a ETA, el Plan ZEN.

Así, potenciaron aún más la política de reinserción, que se había iniciado cuando gobernaba UCD. El General Cassinello habló muy claro al respecto: «Dudo que Francia hubiera adoptado una política de dureza con ETA sin el respaldo de la campaña de reinserción social». Y también utilizaron en el mismo sentido las ofertas de negociación, que lo único que buscaron siempre es lo expuesto

por Cassinello: confundir, dividir y romper.

Otro de los pilares de la estrategia española fue la compra de armas y tecnología francesa. Algo que dejó bien claro la revista *Tiempo* del 30 de enero de 1984, en un artículo titulado “Comprar tanques a Francia a cambio de reprimir a ETA”.

El ejército español necesitaba entonces carros de combate y los expertos militares se inclinaban por los americanos o alemanes, pero decidieron comprar los franceses. Lo hicieron, porque, como bien explicó un jefe de carros español, si los tanques franceses podían terminar con ETA, «harían algo fuera del alcance de cualquier otro tanque del mundo». Un argumento que siguió siendo válido durante muchos años, como lo prueban las sucesivas compras realizadas por el Estado español de armas y tecnología francesa.

En todo caso, la colaboración prestada por el Estado francés al español se hizo cada vez más evidente y fue precisamente esa colaboración la que sirvió como contundente argumento a Felipe González para rechazar de plano que las autoridades españolas tuviesen absolutamente nada que ver con los GAL.

Así, cuando compareció el 23 de junio de 1998 como testigo ante el Tribunal Supremo, llevó una intervención sobre los efectos de la guerra sucia en las relaciones con Francia. En ella, explicaba de modo impecable que carecía de toda lógica que el Gobierno hubiese impulsado el secuestro de Segundo Marey, o cualquier otra acción de los GAL, porque para entonces ya había acordado con Mitterrand unas sólidas bases de colaboración en la lucha contra ETA.

Según él, ese acuerdo con Mitterrand lo alcanzó en una

conversación telefónica el 19 de noviembre de 1983 y fue un mes más tarde cuando viajó por primera vez a París desde que era Presidente, ya que había decidido no hacerlo hasta alcanzar dicho objetivo. Allí, el acuerdo telefónico con Mitterrand se plasmó en un plan de actuación que se tradujo, a partir del 10 de enero de 1984, en múltiples medidas policiales y administrativas contra los exiliados.

Esos datos tan contundentes los había dado ya a conocer años antes quien fuera embajador de Francia en la época de los GAL, Pierre Guidoni, un hombre clave, junto con Mitterrand, en el acuerdo secreto franco-español adoptado a finales de 1983.

Guidoni, miembro honorario del PSOE y gran amigo de Felipe González, dio esos datos en una tribuna titulada "Una página de historia", publicada por el diario *El País* el 23 de enero de 1995, en la que ligó el acuerdo de colaboración contra ETA a unas negociaciones más amplias sobre intereses comunes.

En dicha tribuna, Guidoni arguyó que era imposible que el Ministro del Interior José Barrionuevo y el Secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera tuvieran nada que ver con los GAL, porque ambos eran plenamente partícipes del acuerdo secreto. Según él, para el Gobierno español, «la aparición de los GAL precisamente en este momento» era «lo peor que podía ocurrir en el peor de los momentos». Y se preguntó «¿Cómo creer que los mismos hombres, simultáneamente, organizaban los GAL y negociaban la cooperación legal, oficial, con Francia? Lo uno excluía lo otro».

Si Guidoni hubiese formulado esa pregunta cuando se empezaron a reivindicar las primeras acciones terroristas usando las siglas GAL, cabía la posibilidad de que lo estuvieran engañando artera-

mente. La formuló, en cambio, después de que fueran más que notorias las pruebas contra las autoridades españolas que urdieron junto con él aquel acuerdo secreto franco-español, y con ello quedó, a mi parecer, en suma evidencia.

Por lo demás, su razonamiento fue impecable. Según él, «habría sido demencial» que las autoridades españolas estuvieran tras los GAL, porque «el primer resultado habría sido retrasar, sin duda durante varios años, la entrada de España en Europa. ¿Unos GAL, antes de 1983, cuando los dos Gobiernos no se hablan, no se reúnen? Se hubiera podido entender. En 1983 sería idiota y tremendamente peligroso. Y tremendamente peligroso por idiota».

Sin embargo, está judicialmente probado que Barrionuevo y Vera hicieron precisamente eso que Felipe González y Pierre Guidoni arguyeron con datos contundentes que era tan demencial y absurdo. Y lo hicieron no cuando según Guidoni era plausible, antes de 1983, sino precisamente cuando según él era tan ilógico y absurdo. A buen entendedor…

No, no tiene ninguna lógica que el PSOE lanzara la tercera campaña de guerra sucia sin el acuerdo de Mitterrand y otros dirigentes del PS. En ese caso, tenían mucho que perder y poco que ganar, como explicaron Felipe González y Pierre Guidoni. Ahora bien, con el acuerdo francés sí que tenían mucho que ganar y muy poco que perder… si no hubiesen cometido tantas chapuzas.

Guidoni afirmó en aquella tribuna de *El País* que «Si hubiera habido una vinculación -por escondida que fuera- con los GAL, lo habríamos sabido. No podíamos no saberlo. Y la cooperación habría quedado inmediatamente interrumpida». Ahora bien, basta con ha-

cer un repaso de lo sucedido a finales de 1983, cuando empezaron a actuar los GAL, para ver que las autoridades francesas no pudieron no saber que el Estado español acababa de iniciar una tercera campaña de guerra sucia en Iparralde.

En efecto, como se verá en el último apartado, la Policía, Justicia y autoridades francesas dispusieron de más pruebas de las que trascendieron públicamente sobre la implicación de las Fuerzas de Seguridad española en el inicio de aquella tercera campaña, en octubre de 1983.

En todo caso, los datos públicamente conocidos dejaban ya bien clara dicha implicación, empezando por el secuestro en Baiona, en la madrugada del 16 de octubre de 1983, de los refugiados tolosarras Joxi Lasa y Joxean Zabala. Ambos fueron después torturados de forma atroz en un edificio oficial de Donostia, *La Cumbre*, y tras arrancarles todo cuanto sabían, fueron asesinados y cubiertos con cal viva, para hacerlos desaparecer. Sin duda, algo bien similar a lo que debió de sucederles a *Pertur* y *Naparra* en las precedentes campañas.

Dos días después de que secuestraran a Lasa y Zabala, pillaron “in fraganti" en Hendaia a cuatro policías españoles que estaban intentando secuestrar a otro exiliado, Joxe Mari Larretxea. Y poco después, el 4 de diciembre, secuestraron por error también en Hendaia al ciudadano francés Segundo Marey.

Cuando los mercenarios que lo secuestraron lo trasladaban hacia la frontera, para entregarlo a policías españoles, la Policía francesa detuvo en un control a uno de los secuestradores, Pedro Sánchez, al que intervino efectos bien significativos: dos teléfonos

de Bilbo, uno de la Jefatura Superior de Policía y otro del Gobierno Militar, y numerosas fotografías de refugiados vascos, provenientes con toda seguridad de fichas policiales francesas y españolas.

Las autoridades francesas sabían muy bien que, en las dos primeras campañas de la guerra sucia en Iparralde, había ocurrido otro tanto en varias ocasiones. ¿Y qué hicieron? Exactamente lo mismo que durante la segunda campaña. Después de los secuestros antes mencionados, comenzaron de inmediato los asesinatos de refugiados y tras producirse los dos primeros, en lugar de protestar ante las autoridades españolas, empezaron a tomar contundentes medidas contra los exiliados vascos. A partir del 10 de enero de 1984, hubo múltiples detenciones, confinamientos y deportaciones de éstos a terceros países.

Cabe resaltar al respecto el repentino cambio de actitud del principal dirigente del PS en Iparralde, el diputado Jean-Pierre Destrade, quien pasó de acusar públicamente a la Policía española, a raíz de los primeros asesinatos de los GAL, a finales de 1983, a guardar un más que sospechoso silencio tras reunirse a principios de 1984 con Mitterrand en su residencia de Latché, durante las vacaciones navideñas.

Tres semanas después, el 23 de enero de 1984, se celebró en Baiona una reunión de una quincena de secretarios locales y dirigentes del PS en Iparralde con un enviado gubernamental, el ministro y alcalde de Pau André Labarrere. Una reunión en la que, ante el asombro de la mayoría de los asistentes, éste les transmitió el mensaje de que «El GAL es un mal necesario»[18]. Muchos protestaron con vehemencia. Destrade, en absoluto.

Los atentados terroristas reivindicados usando las siglas GAL siguieron produciéndose y las pruebas de la implicación del Estado español acumulándose como en las precedentes campañas de guerra sucia, sin que las autoridades francesas elevaran protesta diplomática alguna. Al contrario, en septiembre de 1984 ejecutaron las primeras extradiciones de refugiados al Estado español.

Es de suponer que, si se avinieron a hacer la vista gorda ante aquellos crímenes, y a tomar tales medidas contra los exiliados vascos, lo harían a cambio de contrapartidas de la parte española en la negociación mencionada por Guidoni. De ahí la importancia de estudiar a fondo esa negociación y de paso esclarecer cuándo firmaron los presidentes González y Mitterrand el acuerdo secreto. Guidoni afirmó en su tribuna de 1995 en *El País* que fue el 1 de diciembre de 1983. En cambio, González declaró ante el Supremo, en 1998, que no fue a París a estampar su firma hasta el 20 de diciembre.

¿Cuál fue la génesis y el contenido real de aquel acuerdo secreto franco-español? ¿Qué es lo que sucedió realmente entonces? Va a ser bien difícil que algún día se sepa toda la verdad, porque los detalles de ese tipo de actuaciones tan solo se llegan a conocer en escasísimas ocasiones, pero un estudio riguroso seguro que podrá arrojar no poca luz sobre lo que sucedió entonces.

Nótese al respecto la notoria abundancia del material militar y tecnología francesa adquirido en aquellos años por el Estado español, y que el representante de la firma Alsthom, fabricante del Tren de Alta Velocidad francés adquirido por los españoles, fue precisamente Pierre Guidoni quien, como ya se ha explicado, tuvo un papel especialmente destacado en aquellas negociaciones[19].

Otra probable razón, una más, por la que los dirigentes socialistas franceses pudieron decidir hacer la vista gorda ante los atentados terroristas reivindicados usando las siglas GAL pudo ser que, a finales de 1983, tenían un serio problema a la hora de tomar medidas contundentes contra los exiliados vascos: una importante parte de su electorado estaba decididamente en contra[20]. Y hay no pocos datos de que aquellos atentados terroristas no les vinieron nada mal para influenciar a ese electorado sobre la necesidad de adoptar dichas medidas.

Así lo prueba, por ejemplo, esta información publicada en *El País* tras los primeros atentados reivindicados usando las siglas GAL: «En medios periodísticos franceses se afirma que la población de las localidades de Bayona, Hendaya y San Juan de Luz no ha reaccionado ante los últimos sucesos violentos solidarizándose con los refugiados, sino más bien al contrario. Esta información fue corroborada ayer tarde por comerciantes de San Juan de Luz, que sintetizaron su opinión con estas palabras: "Es mejor que se vayan de aquí; nosotros no queremos líos; nos parece horrible que se mate a los refugiados españoles, pero ese no es nuestro problema, sino precisamente de los españoles. Estamos hartos de todos estos líos, y es mejor que se vayan"».

Ricardo García Damborenea, Secretario General del PSOE en Bizkaia cuando participó en el secuestro de Segundo Marey, también mencionó ese aspecto en esas mismas fechas, justo tras los primeros atentados mortales: «La población francesa ha necesitado muy pocas intervenciones del GAL para llegar a la conclusión de que se vive más tranquilo sin etarras»[21].

Damborenea terminó por confesar ante el juez Garzón su participación en la guerra sucia y señaló que el máximo responsable era el Presidente Felipe González. También señaló en una entrevista que «Si el Gobierno hubiese considerado perjudiciales las acciones de los GAL, las habría interrumpido y liquidado en 24 horas. En su mano estaban. En cambio, ascendió y encomendó la lucha antiterrorista a quienes intervinieron en el secuestro de Segundo Marey. Y el mando se centralizó en Madrid. ¿Más claro?»[22].

Hubo más y más atentados y el 1 de marzo de 1984 se produjo el asesinato, por error, de un ciudadano francés. Fue el primero de una larga lista de ocho y su muerte seguro que influyó mucho en la opinión pública francesa. Así se deduce al menos de lo que dijo el Informe Masson sobre terrorismo del Senado francés, publicado en mayo de 1984: «los refugiados vascos que tenían, en algunos casos desde la guerra civil, una buena relación con la población francesa, son percibidos ahora como un elemento de perturbación».

Cabe remarcar que el diario *Sud-Ouest* publicó el 16 de enero una misiva, aprobada por unanimidad por la asamblea de alcaldes labortanos, en la que se decía que «Mientras el País Vasco-francés sirva impunemente de refugio a los perpetradores de crímenes cometidos en territorio español, no se puede honestamente creer que se mantendrá a salvo de represalias que intentarán llevar a cabo ciudadanos españoles, familiares o amigos de las víctimas». Una enorme falsedad que interesadamente hicieron circular las autoridades francesas y españolas.

En dicha carta, los alcaldes pidieron firmemente al Ministro del Interior, Gaston Defferre, que «a fin de proteger la paz civil en el

territorio nacional (...) prosiguiera hasta el final con las operaciones preventivas que había iniciado». Es decir, que siguieran las detenciones, confinamientos y deportaciones de exiliados vascos iniciadas el 10 de enero.

Otro tanto propugnó el informe del Senado francés: incrementar la cooperación policial franco-española, no precisamente contra los GAL sino contra los refugiados. Y, además de remarcar que sería del todo contraproducente crear el departamento vasco que prometió Mitterrand, se felicitó de las medidas que se estaban tomando contra dichos refugiados.

Eso era precisamente lo que buscaban quienes diseñaron aquella campaña que concedió, como el Plan ZEN, una importancia capital a los medios de comunicación. Un aspecto en el que las autoridades españolas mejoraron muchísimo respecto a la segunda campaña de guerra sucia. No en vano pusieron como responsable del CESID en París a Aurelio Madrigal[23], un especialista en la materia que ya en 1980 tuvo una destacada participación en las jornadas del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional sobre "El terrorismo y los medios de comunicación". Tras finalizar la época de los GAL, Madrigal estuvo destinado entre 1987 y 1992 en la Presidencia del Gobierno, como asesor en "antiterrorismo", y en 1996 fue nombrado Secretario General del CESID[24].

En ese aspecto, el Estado español mejoró mucho su actuación respecto a las dos precedentes campañas de guerra sucia, pero los organizadores y ejecutores de la campaña de atentados reivindicados usando las siglas GAL no anduvieron ni mucho menos tan atinados. Sobre todo, José Amedo que fue quien se llevó la palma en

cuanto al número de chapuzas cometidas, que dejaron tras de sí un reguero de pruebas irrefutables.

Por ejemplo, contrató en Portugal a varios mercenarios usando la identidad falsa de Genaro GALlego GALindo, pero pagó las facturas con su propia tarjeta de crédito, bien repleta con los fondos reservados del Ministerio del Interior. Dichos mercenarios perpetraron un par de atentados con múltiples heridos, algunos niños, contra los bares *Batxoki,* el 8 de febrero de 1986, y *La Consolation,* el 13. Tras el segundo, fue detenido uno de los mercenarios que condujo, vía Portugal, al subcomisario Amedo y su ayudante el inspector Michel Domínguez.

La Policía francesa pudo detener al mercenario portugués gracias a un ciudadano que le siguió tras el atentado cometido contra *La Consolation* y otro tanto sucedió en otros atentados de los GAL, incluido el más mortífero de todos, el que costó la vida de cuatro refugiados en el Hotel Monbar de Baiona, el 25 de septiembre de 1985. Los dos asesinos fueron dos hampones de Marsella, detenidos gracias a la intervención de varios ciudadanos que les persiguieron tras el atentado, a riesgo de sus vidas.

La gran mayoría de los mercenarios que actuaron en las dos primeras campañas de guerra sucia en Iparralde eran de ideología ultraderechistas. En cambio, no sucedió otro tanto en la tercera campaña, en la que la mayoría de los mercenarios detenidos en el Estado francés tras la comisión de atentados eran delincuentes comunes o pertenecían al hampa, como los dos del Monbar. Por ejemplo, los asesinos de Xabier Galdeano eran delincuentes de la región parisina. Y otros mercenarios los reclutaron en los bajos

fondos de Burdeos, Tarbes…

Los organizadores de la campaña de los GAL se dirigieron dondequiera esperaban encontrar gente dispuesta a cometer asesinatos de fácil ejecución a cambio de fuertes sumas de dinero, y por eso el único común denominador entre todos ellos fue el dinero de los fondos reservados del Ministerio de Interior español usado para pagarles. Tanto por herido, tanto por asesinado[25].

Supongo que sería una de las causas por las que cometieron tantos errores, ya que asesinaron a ocho ciudadanos franceses que no tenían absolutamente nada que ver con la comunidad de refugiados políticos vascos. Los dos últimos, fueron asesinados el 17 de febrero de 1986, en Bidarrai.

Pocos después, la Gendarmería francesa obtuvo pruebas contundentes de la directa implicación del camionero español Miguel Brescia en aquellos dos asesinatos. Pudo probar, sin lugar a dudas, que fue uno de los autores materiales, pero la Justicia francesa nada quiso saber al respecto durante bastantes años.

Así lo denunció un antiguo capitán de la Gendarmeria, Charles Saenz, en un reportaje emitido por el Canal + de la televisión francesa, *“GAL: asesinos de Estado”*, donde explica cómo entregó aquellas contundentes pruebas a la justicia, que nada hizo durante años pese a su insistencia.

Las declaraciones del excapitán, que no tienen desperdicio alguno, están entre los minutos 46:25 y 48:10 de dicho reportaje, elaborado por los periodistas Xavier Muntz y Bruno Fay, y en ellas se queja amargamente de lo sucedido entonces.

Siendo como eran las víctimas dos ciudadanos franceses, una de ellas una chica de 16 años, el caso fue bloqueado descaradamente… hasta que al final, diez años después del asesinato, la Justicia francesa no tuvo otro remedio que ordenar la detención de Brescia que fue finalmente condenado por aquel crimen en 1999.

Hay otro tema en ese caso que también merecería ser investigado a fondo. Es el referido a una de las armas utilizadas en el crimen de Bidarrai, una pistola ametralladora marca Schmeisser MP 40, bien rara, perteneciente a un lote que, según un artículo del periodista Fernando Múgica, «circulaba por la comisaría de Pamplona a finales de 1985», procedente «de un almacén de un cuartel militar de Burgos».

En el artículo, publicado en *El Mundo* el 10 de octubre de 1995, se remarcaba «la fecha de expedición de las licencias, 6 de diciembre de 1985, sólo dos meses antes del último atentado del "GAL navarro"». Y se aseguraba que fue el inspector Leoncio Castro quien dirigió dicha trama de los GAL, que quedó impune.

En el mencionado artículo de *El Mundo*, se afirmaba que *Leo* Castro «pagaba de su bolsillo y en metálico -con dinero procedente de los fondos reservados- entre 5.000 y 30.000 pesetas a policías de Pamplona que viajaban al sur de Francia para *marcar* etarras. Ayudaba mucho la colaboración, pagada también con fondos reservados, de policías franceses».

Dichas actividades se realizaban «Con el conocimiento y el apoyo económico de la Delegación del Gobierno, encabezada por Luis Roldán» que transmitía las informaciones al Ministerio del Interior donde «se daba la luz verde para los atentados y se enviaban

los fondos reservados necesarios para cada operación, aproximadamente 20 millones de pesetas».

Todo indica que fue la trama navarra de los GAL la que organizó y ejecutó aquel atentado de Bidarrai que costó la vida a dos ciudadanos franceses. Dos nuevas víctimas que pienso fueron la gota que colmó el vaso de lo que estaban dispuestas las autoridades francesas a admitir como «mal necesario», ya que fue el último atentado de la tercera campaña de acciones de guerra sucia en Iparralde. Una campaña en la que se produjeron 23 asesinatos y la desaparición de Lasa y Zabala.

1983 – 1986	
Ejecutores de la Guerra Sucia en Iparralde	
Gobiernos España/Francia	PSOE/PS socialistas
Siglas utilizadas	GAL ninguna
Policía, Guardia Civil y Ejército	Amedo/Domínguez, *GALvarez*... Galindo, Acedo, Bayo, Dorado, Pastrana… Cassinello, Juan Manuel Rivera Urruti…
Mercenarios	Jean-Pierre Chérid, portugueses, Hampa de Marsella y Burdeos…
Muertos	Jean-Pierre Chérid
Armas y municiones	Armas compradas por R. Masa en Andorra Munición militar española
Principales pruebas	Caso Batxoki y Consolation, Caso Lasa-Zabala, Caso Marey…
Consecuencias de la Guerra Sucia	
Acciones Iparralde	Incendios contra negocios relacionados con refugiados
Secuestro-desaparición	Lasa y Zabala
Secuestros fallidos	Confusión con Marey, *Txipi* Salegi, Larretxea
Muertos en Hegoalde	Santi Brouard
Muertos en Iparralde	23 (8 franceses, error): *Txapela, Tomasón*, Xabier Galdeano, cuatro del Monbar…
Medidas contra los refugiados	Tras 2 primeros asesinatos, detenciones, confinamientos y deportaciones en terceros países. Después, además, extradiciones.

Otro crimen impune

Las increíbles chapuzas que cometieron algunos de los organizadores y ejecutores de la Guerra Sucia dejaron al descubierto la directa responsabilidad del Estado español. Y al volverse tan abrumador el peso de las evidencias, no les quedó otro remedio que dejar de lado aquel famoso «No hay pruebas, ni nunca las habrá» del Presidente Felipe González. Entonces, empezaron a recurrir a otra versión de los hechos según la cual, pese a todas las chapuzas cometidas, obtuvieron el resultado que buscaban.

Según dicha versión, las autoridades francesas comenzaron a colaborar con las españolas en la lucha contra ETA, a cambio de que los GAL cesaran en su actividad terrorista en suelo francés. Ahora bien, como se ha visto en el apartado anterior, la colaboración francesa no se obtuvo gracias a los atentados reivindicados usando las siglas GAL. Para el Gobierno francés y el Presidente Miterrand aquella campaña de atentados no fue sino un «mal necesario» para "engrasar" dicha colaboración que estaba ya conseguida de antemano. Fue uno de los medios que diseñaron para llevar a buen puerto aquella bien estudiada estrategia que no podía ser sino

conjunta, franco-española.

Así lo prueba el acuerdo secreto alcanzado a finales de 1983 por las autoridades franco-españolas a raíz del cual las autoridades francesas empezaron a tomar medidas administrativas y policiales contra los refugiados ya el 10 de enero de 1984. Primero, fueron detenciones, confinamientos y deportaciones a terceros países. Después, llegaron las extradiciones y, por último, las entregas.

El 19 de julio de 1986 empezaron a entregar a refugiados vascos a los torturadores españoles, y un año después los entregados ya eran una setentena; entre ellos, Josu Muguruza, posteriormente asesinado en el Hotel Alcalá de Madrid, el 20 de noviembre de 1989, justo cinco años después de que los GAL acabaran con la vida de Santi Brouard.

Fue en ese contexto de continuas entregas de refugiados vascos a los torturadores españoles en el que se empezó a fraguar el último atentado mortal reivindicado usando las siglas GAL. El atentado con bomba-lapa que el 24 de julio de 1987 causó, en Hendaia, la muerte de Juan Carlos García Goena, un tolosarra que se encontraba en Iparralde debido a su rechazo a efectuar el servicio militar obligatorio.

Se trató de la novena víctima de los GAL que nada tenía que ver con la comunidad de refugiados. Sin duda, un nuevo error, por mucho que en el comunicado reivindicando su muerte afirmaran, en francés, que García Goena era «refugiado político y colaborador de ETA m»[26]. Al día siguiente, llamaron a diversos medios de comunicación para insistir en que «era colaborador de ETA Militar y tenía relaciones, además, con Juan Bautista Argote Altuna, miembro de

ETApm (VIII Asamblea), que vivía en su mismo domicilio». Una sarta de mentiras acompañada de una única verdad, que García Goena era vecino de Juan Bautista Argote.

Se dio por hecho que Argote no podía haber sido el verdadero objetivo, porque había sido entregado tres semanas antes a la Policía española y estaba encarcelado en España. Sin embargo, los GAL cometieron ese mismo tipo de error en un caso aún más increíble. Atentaron contra el vecino de un refugiado que había sido asesinado un mes antes. Y lo hicieron, tal y como dio por demostrado la Justicia francesa, pensando que el vecino era el refugiado ya asesinado.

El 2 de agosto de 1985, un comando de los GAL asesinó en Azkarate a Juan Mari Otegi y un mes después, el 4 de septiembre, otro comando de mercenarios, que tenía una foto reciente de él, colocó un artefacto explosivo en los bajos de la furgoneta de un vecino de Otegi llamado Joseph Arraztoa. Un vecino que, como García Goena, nada tenía que ver con los refugiados.

Arraztoa descubrió la bomba y la Policía francesa, tras lograr desactivarla, encontró en las cercanías el vehículo utilizado por los mercenarios para cometer el intento de atentado. En su interior, además de armas, los policías encontraron la antes mencionada foto de Juan Mari Otegi, que era la que entregó a las autoridades francesas cuando solicitó un permiso de residencia. Siguiendo esas pistas, detuvieron más tarde a los mercenarios, miembros del hampa marsellesa, y descubrieron quién los reclutó, Georges Mendaille, un exmilitar francés que trabajaba como informador al mismo tiempo para las Fuerzas de Seguridad españolas y francesas.

El antecedente de ese atentado fallido contra Joseph Arraztoa, al que tomaron por su vecino Juan Mari Otegi, refugiado asesinado un mes antes, hubiese sido ya razón suficiente para considerar la hipótesis de que quienes asesinaron a García Goena cometieran el mismo tipo de chapuza. Encima, esa hipótesis salió más que reforzada cuando los periodistas Melchor Miralles y Ricardo Arqués localizaron justo un mes después del atentado un zulo de los GAL donde hallaron una bomba-lapa de las mismas características que la utilizada en el atentado contra García Goena.

En dicho zulo, localizado en Iparralde, cerca de la frontera, había asimismo numerosa documentación, entre la que destacaba un comunicado, redactado en francés, que era en todo punto idéntico al que hicieron público un mes antes los GAL para reivindicar el asesinato de García Goena… con una única y muy significativa diferencia. En lugar de mencionar en el mismo a la víctima, se mencionaba a su vecino, Juan Bautista Argote, que todo indica era el verdadero objetivo de aquel atentado.

Los datos para encontrar ese zulo, y otros muchos sobre los GAL, se los dio a Ricardo Arqués un informador anónimo, *"Pedro"*, que actuaba de portavoz de un grupo desconocido. Se puso en contacto con él a finales de abril de 1987, y casi de inmediato le advirtió de que iba a producirse un atentado en Iparralde[27]. Revelación sorprendente, porque los GAL habían dejado de actuar en febrero de 1986, quince meses antes. Y efectivamente, poco después se produjo el atentado que costó la vida a García Goena.

Antes de ello, *Pedro* también le había hablado a Arqués del importante zulo de los GAL, diciéndole que le daría los datos nece-

sarios para localizarlo a su debido tiempo[28]. Y le reveló asimismo otros datos muy certeros que dejaron en evidencia el amplio conocimiento que tenían sobre los entresijos de la guerra sucia quienes se escondían tras él.

Fue una vez perpetrado el atentado cuando *Pedro* entregó los datos para localizar el zulo en el que Arqués y Miralles hallaron el comunicado de los GAL, que todo indica era el inicialmente redactado para reivindicar ese atentado. Y fue también entonces cuando les dijo quiénes lo habían cometido, el subcomisario José Amedo y sus hombres, explicándoles las razones que habían tenido para cometerlo.

Ahora bien, *Pedro* se limitó a señalar a Amedo como responsable del asesinato, sin aportar otros datos esenciales que a buen seguro debían conocer quienes se escondían tras él. En efecto, no es nada creíble que supieran que se iba a cometer el atentado y la ubicación de un zulo claramente vinculado al mismo, y no supieran nada más.

Significativamente, la Justicia española nunca ha querido saber nada de nada al respecto, ni ha mostrado interés alguno por esclarecer quién se escondía tras *Pedro* y cuáles fueron sus motivaciones. Algo sobre lo que se han formulado no pocas hipótesis de las cuales considero la más lógica la de que fuesen las autoridades y Fuerzas de Seguridad francesas, porque eran las que tenían el máximo interés en poner al descubierto las actividades de Amedo.

Les interesaba sobremanera deshacerse de Amedo, y con él del claro chantaje que suponía el que reanudaran los atentados. Por eso, lo más lógico es que pusieran todos los medios a su alcance

para neutralizar aquellos planes de los que dio cuenta *Pedro* a Miralles y Arqués y que éstos pudieron corroborar poco después gracias al testimonio de Inmaculada Gómez, la entonces amante de Amedo.

A raíz de la promoción de su libro *"Cal viva"*, Amedo ha apuntado también en la misma dirección, insistiendo en que sabe muy bien quién filtró la localización del zulo de los GAL. Según él, fue *"Jean-Louis",* un policía francés que colaboró muy activamente con los GAL y ha salido a colación en múltiples ocasiones. Su identidad es oficialmente desconocida, pero Amedo no oculta en absoluto que lo conoce y sabe el cargo que ocupa en la Policía francesa.

Eso sí, a Amedo no le interesa en absoluto que se tire de ese hilo y por eso ha insistido tanto en *"Cal viva"* en potenciar una falsa pista sobre el atentado que costó la vida de García Goena. Una falsa pista que vendió en su día el diario *El Mundo* como gran exclusiva y tras la que estaba con toda probabilidad el propio Amedo.

Según Amedo y *El Mundo*, un fotógrafo de Hendaia llamado Patxi facilitó a quienes colocaron la bomba-lapa una foto de la víctima que les permitió identificarlo y atentar contra él. Una acusación basada a todas luces en una burda mentira, porque como ya he explicado, todo indica que aquel atentado no iba dirigido contra García Goena sino contra su vecino Juan Bautista Argote.

El objetivo de esa falsa pista me parece obvio, el de desviar la atención de la que sí conduce directamente a los culpables y he mencionado antes. La altísima probabilidad de que *Pedro* y quienes se escondían tras él dispongan de pruebas más que suficientes contra los autores de dicho atentado. Ésa es la pista se deberían

priorizar para tratar de esclarecer el atentado que costó la vida de García Goena y no desde luego la que lanzó Amedo sirviéndose del diario *El Mundo*.

A pesar de ello, la Justicia española se ha empeñado en seguir la pista falsa, en lugar de llamar a declarar a Amedo para interrogarle sobre la identidad de *Jean-Louis* y los demás policías franceses que colaboraron con él en la guerra sucia. Y también sobre el zulo de los GAL que localizaron Miralles y Arqués, y sobre tantas otras cosas de las que ha hablado a diestro y siniestro mientras promocionaba sus libros.

La Justicia española tampoco ha mostrado interés alguno en interrogar a Miralles y Arqués en relación a todo lo que les contó *Pedro* en su día, antes y después de que se cometiera el atentado que costó la vida a García Goena. Profundizando por esa vía, sí que sería posible esclarecer ese atentado, pero en lugar de ello han preferido seguir la falsa pista que Amedo y *El Mundo* han tenido tanto interés en potenciar. ¿Por qué?

En todo caso, hay suficientes datos que indican que tanto las Fuerzas de Seguridad españolas como las francesas supieron en su día exactamente quién y por qué cometió aquel atentado. Se le escapó al General José Antonio Sáenz de Santamaría en un juicio, cuando el abogado defensor del ex-Secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera le preguntó por el atentado contra García Goena. Respondió que «se sabe quién lo hizo y por qué lo hizo».

Eso sí, el General no dio dato ni explicación alguna al respecto (el diario *El País* señaló que «en esta ocasión fue más misterioso y menos locuaz que en el resto de su declaración»), y bien significa-

tivamente ningún juez mostró interés alguno en profundizar en el conocimiento que manifestó tener sobre los autores y el motivo de dicho atentado.

La Justicia española tampoco se ha interesado en absoluto por las revelaciones que hace Amedo en su libro sobre dicho atentado y por el hecho de que afirme rotundamente que «Rafael Vera sabía y sabe quién y cómo mató a García Goena». Y también hizo oídos sordos ante unas declaraciones del ex-Director de la Guardia Civil Luis Roldán en las que dio muestras fehacientes de saber mucho al respecto.

Otra pista que tampoco ha querido seguir la Justicia española es la referida a la reunión que tras el atentado celebraron en París el Ministro del Interior español, José Barrionuevo, y el número dos del ministerio, Rafael Vera, con el Ministro del Interior francés, Charles Pasqua. Una reunión que, según el diario *El País*, requirió de urgencia el Gobierno francés, y cuyo propósito era el de «pulsar la opinión y la actitud de los máximos responsables de Interior españoles sobre una eventual reactivación de las actividades de los GAL en Francia».

El diario recalcó ese mismo día que «el acuerdo contra el terrorismo entre España y Francia contemplaba el compromiso español de impedir la actuación de los GAL y, por tanto, una vuelta a la escena de estos comandos colocaría en una situación delicada el convenio hispano-francés».

Un día después, el mismo diario publicó otro artículo, basado en una noticia de la agencia *Europa Press*, que tituló "Interior sospecha que el atentado a García Goena fue obra de ETA". Hacía una

semana que se había cometido el atentado y a esas alturas la autoría del mismo era irrefutable, pero ello no impidió que las “fuentes antiterroristas” citadas por la agencia sostuvieran con todo descaro que los GAL nada tenían que ver con el atentado. Y no sólo eso, sino que trataron de endosárselo a ETA cuando sabían de sobra que era del todo imposible que hubiese sido obra de dicha organización.

Encima, un portavoz de la Secretaría de Estado para la Seguridad pretendió que la reunión que Vera y Barrionuevo mantuvieron días antes en París con el Ministro del Interior francés no había tenido «ninguna relación con el atentado terrorista contra García Goena». ¡Vaya si la tuvo, y vaya si les leyeron la cartilla los franceses!

En todo caso, todos los trapos sucios los lavaron en casa y dos meses después, a principios de octubre de 1987, llegó la culminación de la política de entregas con la mayor operación policial conocida en Europa contra un colectivo de exiliados desde la II Guerra Mundial. En pocos días, la Policía francesa detuvo a 120 refugiados vascos y familiares en medio de escenas de violencia inusitada. Entregaron a la mitad a los torturadores españoles, y deportaron otra quincena a Argelia y Venezuela. El pacto secreto franco-español de finales de 1983 seguía adelante.

Hay mucho que investigar

Nada más empezar a ejecutarse la tercera y más cruenta campaña de la guerra sucia en Iparralde, la de los GAL, el diario *El País*, afín al PSOE, comenzó a publicar informaciones que dejaban bien claro que la guerra sucia se venía practicando desde el franquismo.

Años después, su editorialista Javier Pradera lo dejó meridianamente claro: «La lucha ilegal contra ETA arrancó en tiempos del franquismo, prosiguió con los primeros gobiernos de la transición, mantuvo su curso durante los tiempos de UCD y reapareció bajo la primera legislatura del PSOE, dirigida siempre por agentes de los aparatos del Estado que utilizaban a la misma cuadrilla de mercenarios para los trabajos sucios».

Eso sí, al mismo tiempo, *El País* hizo todo lo posible para que no se esclareciera quiénes eran los responsables últimos de aquella guerra sucia. Por ejemplo, con editoriales como el que publicó a los pocos días de producirse el primer asesinato reivindicado usando las siglas GAL, el del refugiado Ramón Oñaederra.

En dicho editorial, del 21 de diciembre de 1983, justo cinco años después del atentado mercenario contra *Argala*, se afirmaba que, «Según testimonios nada sospechosos, *Argala* "fue eliminado por especialistas no ajenos a esferas policiales españolas". Un responsable del Ministerio del Interior comentó: "Convinimos que las

policías se arreglaran entre ellas y que los asuntos como la muerte de *Argala* no deben ser de los responsables de esos departamentos (los ministerios del Interior francés y español); los políticos no deben saber estas cosas, porque los políticos somos indiscretos, y existen problemas de Estado que deben ser incontables"».

Eso de que «los políticos no deben saber estas cosas» bien se demostró después judicialmente que no era en absoluto cierto. En las mismas fechas en que *El País* publicaba ese editorial, altos responsables políticos del PSOE estaban metidos hasta las cejas en la guerra sucia. Y según todos los indicios, también lo debieron de estar antes los dirigentes de UCD y los franquistas.

Tras ratificar el Tribunal Supremo la condena de los responsables del PSOE por el secuestro de Segundo Marey, *El País* volvió a insistir en que los socialistas no hicieron sino continuar la guerra sucia iniciada durante el franquismo. Y lo hizo aportando nuevos reveladores datos al respecto. En particular, los de un informe elaborado en 1979 por la Guardia Civil del que ya he hablado. Un informe que contenía contundentes pruebas sobre la protección que recibió el mercenario Jean-Pierre Chérid por parte de los servicios de información cuando gobernaba UCD.

En el citado informe se mencionaba a dos personas como directas responsables de que se suspendiera de inmediato una investigación sobre Jean-Pierre Chérid y otros mercenarios que habitaban con él en un piso de Madrid. A un capitán de fragata, que bastantes años después fue identificado con toda seguridad, Juan Manuel Rivera Urruti, y al comisario-jefe de Chamberí, cuya identi-

dad sigue siendo desconocida, pese a que en principio debería haber sido más fácil de identificar que el primero.

Cuando el parlamentario de *Amaiur* Jon Iñarritu preguntó al Gobierno quién era en 1979 el comisario-jefe de Chamberí, éste pretendió desconocer dicho dato. Algo del todo imposible, ya que el Ministerio del Interior debe saber sin duda alguna quién dirigía entonces la comisaría de Chamberí. Y los actuales responsables de la propia comisaría también, por supuesto.

No me extrañaría nada que el citado comisario-jefe fuese el que se menciona en el libro *"Amedo: el Estado contra ETA"* cuando se habla de la selección de mercenarios por parte de Rivera Urruti. En concreto, se dice que «Un comisario de Policía que trabajaba a las órdenes del *superagente* Conesa, visitó en la prisión madrileña de Carabanchel al argentino José María Boccardo Román y, tres días después, el preso fue excarcelado por extraviarse sus expedientes judicial y penitenciario»[29]. Boccardo participó entonces, junto con Jean-Pierre Chérid, en múltiples acciones de guerra sucia.

Por eso, sería muy conveniente que ese futuro mecanismo independiente para la averiguación de la verdad que considero tan necesario indagara al respecto. Y también convendría que investigara todo lo referido a una importante reunión celebrada en Madrid, en marzo de 1983, de la que dio cuenta el diario *El País* en junio de 1986. Una reunión en la que participaron, por una parte, el comisario José María Escudero Tejada y su jefe Jesús Martínez Torres, y por la otra, el ultraderechista estadounidense Herbert Quinde y un alto oficial de la Gendarmería francesa.

En apartados anteriores, he mencionado varias veces a Escu-

dero, entre otros motivos debido a su presunta relación con la desaparición de *Pertur,* y Martínez Torres también dio mucho de qué hablar en su día. Conocido torturador franquista, fue ascendido por el PSOE a Comisario General de Información, y como tal estuvo imputado por los crímenes de los GAL.

Tras aquella reunión celebrada en Madrid, ambos recibieron la misma condecoración que se impuso entonces a los cuatro guardias civiles condenados en el caso Lasa-Zabala: el jefe del cuartel de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo, y tres de sus hombres de máxima confianza, Ángel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo. Y no sólo recibieron la misma medalla, sino que les fue impuesta el mismo día, el 12 de octubre de 1984, día del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Se trató de la Cruz de la Orden del Merito de dicho Cuerpo concedida ese día tan solo a cuatro policías, otro de los cuales era el GALoso José Amedo.

Años después de que *El País* filtrara la información sobre aquella reunión celebrada en Madrid en marzo de 1983, los periodistas Melchor Miralles y Ricardo Arqués la corroboraron en su libro *"Amedo: el Estado contra ETA"*. Además, precisaron que en la reunión «se comentaron los errores cometidos por el Batallón Vasco Español (BVE) y se estudió la necesidad de profesionalizar la "Guerra Sucia" contra ETA». Y también que «Quinde se comprometió a facilitar el contacto con "professional killers"».

El 6 de agosto de 1995, los también periodistas Antonio Rubio y Manuel Cerdán volvieron a corroborar esos datos en el diario *El Mundo*. Lo hicieron en un artículo en el que aseguraron que todos esos detalles les fueron confirmados por fuentes policiales.

Nótese que en la información publicada por *El País* en 1986 se dejaba caer que, previamente a la reunión celebrada en Madrid en marzo de 1983, «los servicios españoles habían comprobado la identidad del Comandante francés, quien fue seguido y fotografiado desde un apolo -vehículo camuflado de seguimiento y vigilancia con medios audiovisuales- al llegar al aeropuerto de Barajas y durante su visita a Madrid».

A ese dato hay que añadirle, además, que también Enrique Rodríguez Galindo se dedicaba a grabar a los policías franceses que colaboraban con él. Y no sólo a ellos, porque, según denunció el diario *El Mundo* en un largo artículo con datos bien precisos al respecto, grabó asimismo a todos los altos cargos de Interior que pasaron por el cuartel de Intxaurrondo cuando él lo dirigía. Unas grabaciones que, según el diario, eran la clave de su ascenso al generalato: «Muchos han considerado que ese nombramiento era totalmente inexplicable. Sabiendo lo de las cintas que tiene en su poder, quizá el nombramiento les extrañe ya menos».

Para ubicar la información publicada por *El País* en junio de 1986, hay que recordar lo sucedido cuatro meses antes, en el curso de la tercera campaña de guerra sucia ejecutada en Iparralde, la de los GAL. Aquel mes de febrero de 1986 volvieron a asesinar por error a dos ciudadanos franceses, elevando la cifra de franceses asesinados por error a ocho, y fue detenido un mercenario portugués que condujo, vía Portugal, al policía José Amedo.

Es bien probable que, como cinco años antes a raíz del atentado cometido en el bar Hendayais y el fallido contra *Antxon* Etxebeste, los franceses se empezaran a hartar de las chapuzas de

los españoles. Y que éstos les respondieran que mejor les valía cerrar la boca, porque podían tirar de la manta y dejar al desnudo la implicación francesa, con pelos y señales. Por eso filtraron a *El País* aquella información sobre la reunión celebrada en Madrid en marzo de 1983, meses antes de que empezaran a producirse las acciones terroristas reivindicadas usando las siglas GAL.

Doy por hecho que, pese a no dar el nombre del alto oficial de la Gendarmería francesa que participó en la reunión, conocían de sobra no sólo esa identidad sino bastantes más datos bien comprometedores para el Estado francés. Y que el objetivo de la filtración era precisamente hacer alarde de que podían filtrar todos esos datos si lo considerasen necesario.

Es un tema que merecería ser investigado a fondo y otro tanto se puede decir respecto a lo que cuenta José Amedo en su libro *"Cal viva"* que está repleto de mentiras, pero que contiene algunas revelaciones de lo más interesantes. Además, como Amedo es un bocazas, también de sus mentiras se pueden sacar no pocas conclusiones.

En todo caso, es obvio que Amedo guarda numerosos secretos sobre la guerra sucia ejecutada en Iparralde usando las siglas GAL, a partir de 1983. Y es muy probable que también sepa mucho sobre los atentados cometidos años antes usando otras siglas; sobre todo, la del Batallón Vasco-Español, BVE.

Poca duda cabe de que Amedo empezó a "trabajar" en Iparralde en pleno franquismo, y sería conveniente indagar sobre su relación con personajes como Ramón Lillo, al cual define como «viejo conocido». Lillo dirigió en 1976 un comando mercenario que

atentó en Iparralde contra varios refugiados utilizando unas metralletas Marietta compradas por la Policía española en USA, y no sería nada de extrañar que Amedo tuviera que ver con aquellos atentados.

Lillo y Amedo eran entonces inspectores de policía. El primero, agente del Servicio Secreto franquista, el SECED. El segundo, según Wikipedia, ejecutó en la década de los 70 «labores de espionaje relacionadas con el entorno de la organización terrorista ETA». Y fue precisamente en 1976 cuando dos inspectores con los que Amedo compartía piso desaparecieron en Iparralde. Un año después, hallaron sus cadáveres, hecho que lo marcó profundamente[30].

Fue asimismo en 1976 cuando otro viejo conocido de Amedo empezó a trabajar para el SECED. Se trataba de Jesús Diego de Somonte que en 1983 era ya comandante y jefe de los Servicios Secretos en Euskal Herria. Ambos tenían por costumbre reunirse en la Jefatura Superior de Policía de Bilbo.

Cuando estaba promocionando *"Cal viva"*, a Amedo se le escapó que también conocía al capitán Alberto Martín Barrios que los octavos de ETA pm secuestraron, y dos semanas después mataron, en octubre de 1983. Según la versión oficial, fue la muerte del capitán la que desencadenó la guerra sucia de los GAL, pero tengo fundadas sospechas de que no fue dicho fatal desenlace el que precipitó los acontecimientos, sino el secuestro mismo.

Los secuestradores de Martín Barrios afirmaron en un comunicado que lo estaban sometiendo a un «concienzudo interrogatorio» sobre «la tarea real» que desempeñaba, porque habían detec-

tado que el capitán realizaba «extraños movimientos» que ligaban a «una actividad reservada de tipo especial».

Entonces, la Policía pretendió que, quizás, sus secuestradores lo habían confundido con el comandante Diego de Somonte, que acabo de mencionar. Un bulo que sospecho lanzaron para esconder la verdad: que el capitán Martín Barrios era también de los Servicios Secretos.

Me sobran los motivos para sospechar que ésa era su verdadera labor. Entre otros, el que lo sucedido tras su secuestro sea mucho más comprensible si su ocupación oficial, en la farmacia del Gobierno Militar de Bilbo, no era sino una tapadera para otras inconfesables actividades.

De ser la verdadera labor de Martín Barrios la que sospecho, se entiende a la perfección que su secuestro hiciera saltar todas las alarmas en el corazón del Estado. No era para menos. Si el capitán estaba al corriente de lo que Amedo y compañía estaban tramando en Iparralde, las autoridades españolas se tuvieron que poner muy, pero que muy nerviosas.

En esas circunstancias, no es nada de extrañar que dieran la orden de secuestrar, a toda costa y con suma urgencia, a algún militante cualificado del grupo que se responsabilizó del secuestro del capitán. Una orden que recayó precisamente en Amedo que hace en *“Cal viva”* una sorprendente revelación al respecto.

En su día causó un gran escándalo que el inspector de policía Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles fuese detenido junto con tres GEO por la Policía francesa, cuando estaban intentando secuestrar en

Hendaia al dirigente de ETA (pm) Joxe Mari Larretxea. Ese episodio era harto conocido, pero lo que no se sabía es que el inspector Argüelles ya había sido detenido días antes, armado, por la misma Policía.

Eso es lo que cuenta, sorprendentemente, Amedo en su libro. El ex-subcomisario relata en *"Cal viva"* que estaban preparando un secuestro en Iparralde. Pretende que su objetivo era Larretxea, pero todo indica que el primer objetivo de los secuestradores fue Kandido Ostolaza, otro militante cualificado de ETA (pm).

Las Fuerzas de Seguridad españolas estaban persuadidas de que Ostolaza disponía de información relevante sobre los secuestradores del capitán Martín Barrios, y lo vigilaron a la entrada de la ikastola de Angelu a la que llevaba cotidianamente a sus hijos.

Una vez que dispusieron de toda la información necesaria, decidieron ejecutar el secuestro, armados y distribuidos en dos grupos, uno de los cuales se encontraba en un callejón comandado por el inspector Argüelles que, según Amedo, «portaba un fuerte anestésico que yo le había facilitado para dormir al etarra»[31].

Amedo cuenta en su libro que dicho grupo se vio sorprendido y detenido por la Policía francesa. Entonces, pensó que «lo mejor que podía hacer era comunicárselo desde Irún a Sancristóbal, para que éste hablase con el ministro Barrionuevo y lo arreglaran a nivel político, como así ocurrió. Dos horas después la policía francesa ponía en la línea fronteriza a Argüelles y a sus dos acompañantes»[32].

Y prosigue: «Una vez en Bilbao, a altas horas de la noche, subimos al despacho que Francisco Álvarez tenía en la antesala de

su vivienda en la propia Jefatura Superior de Policía, donde se encontraban Sancristóbal, *Plancha* y, esta vez, Damborenea, hombre fundamental en las decisiones de la trama que se estaba montando. Sancristóbal llamó a Vera para decirle que ya habíamos regresado y que se iba a cambiar la estrategia para capturar a Larretxea.

Vera le contestó que los franceses estaban muy cabreados y que Barrionuevo había tenido una fuerte discusión con su homólogo francés, en la que había estado a punto de intervenir el propio Felipe González para mediar con François Mitterrand».

Más adelante, Amedo dice en su libro que «Como ya no se podía regresar a Hendaya con armas, se tomó la decisión de reclamar la presencia en Bilbao de tres miembros de los GEO expertos en operaciones especiales para que acompañasen a Argüelles»[33]. Y fue pocos días después, el 18 de octubre de 1983, cuando volvieron a detener al inspector Argüelles en Hendaia en compañía de los tres GEO. Los pillaron in fraganti, cuando estaban a punto de consumar el secuestro de Larretxea. El escándalo fue mayúsculo y hubiese sido mucho mayor de saberse que días antes Argüelles y otros policías españoles ya habían sido detenidos, armados, y puestos casi de inmediato en libertad.

Nada más producirse el intento de secuestro de Larretxea, varios medios de comunicación recibieron filtraciones sobre lo que había ocurrido en días anteriores, provenientes seguramente de la Policía francesa, y bien que se encargaron las autoridades francesas y españolas de cortar de raíz aquellas filtraciones.

El diario *El País* mencionó la detención de "cuatro funcionarios policiales de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, que no

trascendió y fue resuelto favorablemente por vía diplomática”, sin más explicaciones, pero otros medios fueron más explícitos. *Radio Popular/Herri Irratia* habló el 19 de octubre del intento de secuestro de Kandido Ostolaza, que también fue mencionado por la televisión vasca, y el diario *Deia* publicó dos días después un artículo en portada donde se mencionaba que cuatro policías españoles fueron detenidos armados por sus colegas franceses y puestos en la frontera.

Deia situó la detención de los policías en la noche del viernes 14 al sábado 15 de octubre, justo un día antes de la desaparición en Baiona de Lasa y Zabala, y uno de los testigos que fue a denunciar a la Justicia francesa la desaparición de ambos refugiados sacó a relucir ante el juez de Baiona aquel importante dato.

El juez, que dijo desconocer se hubiesen producido las detenciones de que hablaron *Deia* y *El País*, se mostró interesado en averiguar más datos sobre el tema[34], pero ya sabemos en qué se tradujo aquel supuesto interés. En nada de nada.

Es obvio que aquellos datos por los que dijo interesarse el juez estaban en poder de la Policía francesa que detuvo a aquellos policías españoles armados. Seguro que registró tanto sus identidades, como las carácterísticas de las armas que portaban, y del anestésico que menciona Amedo en su libro, antes de conducirlos a la frontera por órdenes superiores.

Sin embargo, han tenido que pasar treinta años, y abrir Amedo su gran bocaza, para conocer parte de lo que sucedió entonces. Algo que vuelve a dejar bien claro el nivel de complicidad de la Policía, Justicia y autoridades francesas con las españolas que diseñaron y ejecutaron aquella guerra sucia.

Tras ser detenidos in fraganti intentado secuestrar a Larre-txea, el inspector Argüelles y los tres GEO fueron en principio encar-celados, pero los liberaron bien pronto, tras haberse comprometido a comparecer en su juicio. Promesa que jamás cumplieron, pese a que el entonces Ministro del Interior español, José Barrionuevo, manifestara al respecto que «Nosotros hacemos honor a nuestros compromisos».

Una veintena de años después, en 2002, las autoridades espa-ñolas devolvieron el favor a las francesas tras ser detenidos por azar en el Estado español dos agentes secretos franceses, cuando esta-ban preparando un asesinato con una sofisticada arma de guerra. Sucedió lo mismo que con Argüelles y los GEO. Según uno de los magistrados que decidieron excarcelar a ambos agentes, todo «vino atado desde el Ministerio del Interior y desde la Fiscalía General del Estado. No pudimos hacer nada para evitar su puesta en libertad».

En todo caso, habría que preguntarle a Amedo de qué conocía al capitán Martín Barrios, y también podría aclarar, de paso, algunas cuestiones relativas a su extrecha relación con el ya falle-cido comandante Diego de Somonte. Por ejemplo, si es cierto, como afirma su viuda, que ambos viajaban a menudo juntos a Iparralde y que su marido también tenía previsto hacerlo el 23 de septiembre de 1983, en aquel viaje en el que, a la vuelta, Amedo tuvo un accidente de auto en la autopista.

Según el ex-subcomisario, la Ertzaintza le incautó entonces un maletín que contenía datos muy comprometedores sobre diversos mercenarios que pocas semanas después empezarían a cometer los atentados reivindicados usando las siglas GAL. Se trataría de núme-

ros de teléfono de dichos mercenarios, y pisos de contacto que iban a usar. Unos datos que la Ertzaintza jamás puso a disposición de juez alguno.

Todos aquellos datos y otros más contenidos en aquel famoso maletín probablemente tuvieron mucho que ver con unas sorprendentes revelaciones sobre los GAL publicadas en la revista *Euzkadi*, en aquel entonces órgano de expresión del PNV, cuatro meses después del accidente sufrido por Amedo.

Fue en enero y febrero de 1984, en plena escalada de atentados reivindicados usando las siglas GAL, y difícilmente podían aquellas revelaciones ser debidas a un envío anónimo, como pretendió la revista. No lo podían ser, porque las acusaciones que se vertían eran muy graves. Unas acusaciones que apuntaban muy directamente al Estado como organizador de los GAL y que nunca hubiesen hecho públicas de no estar sólidamente respaldadas.

Por eso, se dio por hecho que aquellos datos publicados en los números 121 y 124 de *Euzkadi*, y el organigrama de los GAL que los acompañaba, provenían de la documentación incautada por la Ertzaintza a Amedo cuando éste sufrió el accidente.

A partir de entonces, la Ertzaintza recopiló abundantes datos, tanto sobre los GAL en general, como sobre el subcomisario y su ayudante el inspector Michel Domínguez en particular, pero tan sólo entregaron al juez, tras varias demandas de éste, los datos referidos a las pérdidas millonarias de Amedo en el casino de Donostia. El periodista Santiago Etxauz dio abundantes y comprometedores datos al respecto en la revista *Tiempo* del 10 de junio de 1996. Su extenso artículo no tiene desperdicio alguno.

Otra cuestión que convendría investigara ese futuro mecanismo para la averiguación de la verdad es el papel que jugaron las autoridades francesas tratando de impedir que Amedo y Dominguez fueran condenados y acabaran en prisión. En efecto, el abogado que ejerció la acusación en dicho proceso, Miguel Castells, denunció que dichas autoridades retuvieron un documento clave «en el organismo gubernativo competente para evitar que los dos polícías fueran condenados, algo que no consiguieron finalmente»[35].

Cabe sospechar que aquella actuación de las autoridades francesas tuviera mucho que ver con el hecho de que Amedo sabía y sabe muchísimo sobre no pocos agentes policiales franceses que participaron en la guerra sucia a cambio de fuertes sumas de dinero procedente de los fondos reservados.

Ya he explicado en el apartado anterior que Amedo no oculta en absoluto que conoce la identidad y el cargo que ocupa en la actualidad en la Policía el más famoso de ellos, *"Jean-Louis"*, y es evidente que también conoce la identidad de bastantes otros, pero tan sólo cita por su nombre a dos de quienes quedaron al descubierto: Jacques Castets y Guy Metge.

En *"Cal viva"*, Amedo denuncia que ese último falleció en un accidente de tráfico que provocaron «los servicios galos de Información» a los que dirige un claro mensaje, al igual que a los hispanos. Les advierte de lo muchísimo que sabe, y guarda a buen recaudo, como guardó aquel famoso comunicado de los GAL manuscrito por Sancristóbal y Damborenea.

Según la viuda de Diego de Somonte, su marido le solía decir que cualquier día iban a hacer desaparecer a Amedo, y el propio

Amedo también ha dejado bien claro su temor al respecto. Afirma que le ofrecieron fugarse de la cárcel, para que rehiciera su vida en Sudamérica con otra identidad, y que se negó en redondo por temor a que se deshicieran de él, como se deshicieron de Guy Metge.

Por eso guarda Amedo a buen recaudo sus comprometedores secretos, como seguro de vida, y por eso habla tan descaradamente de esos secretos en sus libros y entrevistas, con absoluto desprecio no sólo a las víctimas de la guerra sucia, sino también a la propia Justicia que nunca ha tomado medida alguna al respecto.

No es nada de extrañar, porque los jueces españoles han mostrado siempre una clara falta de interés por esclarecer la guerra sucia. Han investigado bien pocos casos y en ninguno de ellos lo han hecho hasta el final. Absolutamente en ninguno.

En efecto, el 100% de los asesinatos debidos a la guerra sucia continúan sin ser del todo esclarecidos por la Justicia española, que sigue sin querer saber nada sobre la identidad del responsable máximo de los GAL, el bien conocido señor X. E incluso las acciones de guerra sucia que se consideran del todo esclarecidas están muy lejos de serlo.

Sirva como ejemplo lo sucedido con las dos acciones en las que se produjeron las condenas más emblemáticas, las de los casos Marey y Lasa-Zabala, que están, ambos, bien lejos de estar del todo esclarecidos.

En el caso Lasa-Zabala, ni tan siquiera se inculpó al principal responsable, el señor X, y encima fueron no pocos los agentes del cuartel de Intxaurrondo claramente implicados en el secuestro, tor-

turas y asesinato de ambos refugiados que no pagaron un solo día de cárcel, pese a las contundentes pruebas en su contra.

Además, nunca se ha aclarado el verdadero objetivo de aquel secuestro en el que las víctimas no fueron, como era habitual en dichos casos, refugiados a los que podían sacar abundante y valiosa información sobre la organización en la que tenían puestos de responsabilidad.

Pertur y *Naparra*, eran dirigentes de sus respectivas organizaciones, y el interés de las autoridades españolas en secuestrarlos y arrancarles toda la información de que disponían era más que evidente. También lo es que consiguieron sus objetivos, ya que tanto ETA (pm) como los Comandos Autónomos Anticapitalistas no sobrevivieron muchos años al secuestro de sus dirigentes.

Se sabe, además, que en 1983 quisieron secuestrar a *Txomin* Iturbe, *Antxon* Etxebeste y Juan Lorenzo Lasa Mitxelena "*Txikierdi"*, entonces máximos responsables de ETA (m). Los datos más precisos al respecto los ofreció el diario *El Mundo*, el 6 de agosto de 1995, en un artículo de portada titulado *"Guardias Civiles de Intxaurrondo planearon en el 83 secuestrar a toda la cúpula de ETA"*.

Según *El Mundo*, «Para desarrollar la operación se contaba con el apoyo de tres policías galos, uno de ellos un mando», que cobrarían por ello «alrededor de dos millones de francos franceses». Detendrían a *Txomin*, *Antxon* y *Txikierdi*, «con alguna excusa legal», y los entregarían narcotizados en la frontera «a agentes del acuartelamiento de Intxaurrondo que los trasladarían inmediatamente al Palacio de La Cumbre».

Fue precisamente a *La Cumbre* a donde llevaron esos mismos agentes de Intxaurrondo a Lasa y Zabala y salta a la vista la enorme diferencia entre el proyecto inicial de secuestrar a los máximos dirigentes de ETA y el resultado final.

El general de la Guardia Civil José Antonio Sáenz de Santamaría dejó muy claro en su día que los militantes detenidos les daban información (tras torturarlos a fondo, por supuesto) y los muertos satisfacción. Y no cabe duda de que la máxima satisfacción la obtuvieron con los secuestrados a quienes, antes de matar y hacer desaparecer, pudieron arrancar muy valiosa información. De ahí que secuestraran o intentaran secuestrar siempre a militantes que estaban persuadidos disponían de información muy relevante, algo que no sucedía en absoluto en el caso de Lasa y Zabala.

Justo antes de que ambos desaparecieran en Baiona, intentaron secuestrar a Kandido Ostolaza, con el resultado de varios policías españoles detenidos y puestos casi de inmediato en libertad, y dos días después se produjo un nuevo intento de secuestro, el de Joxe Mari Larretxea, que volvió a saldarse, como el de Ostolaza, con nuevas detenciones de policías españoles.

Entonces, se apuntó una hipótesis sobre el secuestro de Lasa y Zabala que tiene todos los visos de ser muy certera: «Teniendo en cuenta la adscripción cercana a ETA (m) de los refugiados desaparecidos en Baiona y la cercanía a los polimilis de Larretxea y Ostolaza, podría tratarse de una acción policial que, siguiendo las sugerencias del Plan ZEN, tratara de crear un enfrentamiento entre las distintas organizaciones armadas vascas presentando los secuestros como acciones de hostigamiento mutuo»[36].

Los fiascos que sufrieron tanto en el intento de secuestro de Kandido Ostolaza, como en el de Joxe Mari Larretxea, echaron por tierra sus pretensiones, pero de no haber sido así muy poca duda cabe de que hubiesen puesto a funcionar sus fuentes de intoxicación habituales, para achacar las desapariciones a enfrentamientos internos, como hicieron en los casos de *Pertur* y *Naparra*.

El acta del CESID conocida como *"acta fundacional de los GAL"*, fechada el 6 de julio de 1983, también hacía hincapié en que convenía encubrir las acciones de guerra sucia como si fueran el resultado de enfrentamientos entre diversas ramas de ETA, y todo apunta a que siguieron al pie de la letra sus instrucciones.

El *"acta fundacional"* ponía especial énfasis en que la forma de acción más aconsejable era «la desaparición por secuestro» de dirigentes de ETA. De ahí que sus objetivos prioritarios fueran *Txomin*, *Antxon* y *Txikierdi*, pero el secuestro del capitán Alberto Martín Barrios vino a trastocar todos sus planes, y les obligó a fijar, como ya he explicado antes, otra prioridad absoluta.

Es en ese contexto en el que cabe encontrar una lógica al secuestro de Lasa y Zabala, y la hipótesis que mejor explica todo lo sucedido entonces pienso que es la de un reparto del trabajo sucio entre la Policía de Bilbo y la Guardia Civil de Intxaurrondo. Los primeros tuvieron como objetivo a unos pocos militantes de ETA (pm) que estaban persuadidos disponían de información relevante sobre los secuestradores de Martín Barrios, y a los segundos les bastaba con secuestrar a cualquier refugiado cercano a ETA (m), para simular un enfrentamiento entre ambas ramas de ETA.

Ni qué decir tiene que el objetivo de los guardias civiles de Intxaurrondo era mucho más sencillo, pero el caso es que los policías fracasaron en toda la línea y fue entonces cuando el Ministro del Interior José Barrionuevo «descubrió» a la Guardia Civil.

En cuanto al caso del secuestro de Segundo Marey, la gran mayoría de la gente también lo considera del todo esclarecido, pero no lo fue sino parcialmente, porque tanto responsables políticos como policías españoles y franceses ocultaron no pocas cosas.

Además, es bien fácil de demostrar que mintieron descaradamente respecto a otras. Por ejemplo, afirmaron que el objetivo del secuestro era el refugiado Mikel Lujua y que se dieron cuenta de la confusión en cuanto Marey fue entregado en la frontera al entonces inspector José Amedo. Imposible. La Justicia española dio por probado que fue eso lo que sucedió, pero es evidente que era absolutamente falso.

Si el objetivo hubiese sido Lujua y Amedo se hubiera dado cuenta del error cometido de inmediato, en la frontera, es del todo imposible que después sucediera lo que sucedió y contó *El País*: los secuestradores de Marey «le intentaron sacar información fundamentalmente sobre personas, empresas y entidades que pagan el impuesto revolucionario a ETA, así como el destino de las cantidades económicas obtenidas por este sistema».

Lo que contó *El País* fue además concordante con lo que afirmaba el famoso comunicado manuscrito dos días después del secuestro por los entonces Gobernador Civil de Bizkaia, Julián Sancristóbal, y Secretario general del PSOE en Bizkaia, Ricardo García Damborenea. En aquel comunicado, que guardó Amedo durante

años y sirvió para probar la implicación directa de ambos responsables políticos, se decía que Segundo Marey había sido secuestrado «por participar en el cobro del impuesto revolucionario». En el siguiente comunicado, ya no mencionaron nada similar.

Es indiscutible que sometieron a Marey a torturas, hasta que se tuvieron que rendir a la evidencia de que nada tenía que ver con ETA. Lo dice bien claro uno de sus secuestradores, Jean-Pierre Echalier, entre los minutos 8:25 y 9:05 de un reportaje emitido por el Canal + de la televisión francesa que ya he mencionado en un apartado anterior, *"GAL: asesinos de Estado"*.

También lo denunció el propio Marey en una entrevista: «Fue una tortura sistemática. Eran profesionales (…) Se reían de mi postura, de mi dolor. Tenía alucinaciones, pesadillas espeluznantes que se han repetido desde entonces». A pesar de ello, la sentencia condenatoria del caso Marey no mencionó para nada las torturas que sufrió y encima los jueces afirmaron que los secuestradores no lo interrogaron. ¡Vaya si lo hicieron! Con saña.

El mercenario Echalier precisa en el reportaje antes mencionado que pretendían secuestrar al "tesorero de ETA". Lo dice bien claro dos veces, y lo que está más allá de cualquier duda es que, al menos hasta el segundo día tras el secuestro, tanto mercenarios como autoridades y policías españoles estuvieron persuadidos de que Segundo Marey tenía mucho que ver con las finanzas de ETA.

Esa historia de que pretendían secuestrar a Mikel Lujua, que nada tuvo nunca que ver con dichas finanzas y era 14 años más joven que Marey, no resiste el más mínimo análisis. La verdadera confusión consistió, sin duda, en creer que Marey era "el tesorero

de ETA" y algunos de los implicados, sino todos, seguro que saben por qué llegaron a semejante conclusión.

En su libro *"Cal viva"*, Amedo vuelve a mentir al respecto. Sigue pretendiendo que decidieron secuestrar a «Mikel Lujua Gorostiola, responsable de finanzas de la banda, después de que el policía Guy Metge facilitara durante un almuerzo en Bilbao su dirección en Hendaya y un plan para secuestrarlo a través de un grupo de mercenarios»[37].

Amedo sabe de sobra que Lujua nunca tuvo absolutamente nada que ver con las finanzas de ETA y que Metge no facilitó la dirección de Lujua en Hendaia sino la de Segundo Marey, al que todos los presentes en aquel almuerzo consideraban «responsable de finanzas de la banda». Y así lo siguieron considerando, hasta que, tras someterlo durante días a duras torturas, se tuvieron que rendir a la evidencia de que no tenía absolutamente nada que ver con ETA.

Es obvio que Amedo sabe el motivo por el que pensaban que Marey era "el tesorero de ETA", y por eso me llamó la atención en su día un detalle que me pareció muy significativo. Que yo sepa, al hablar de Segundo Marey, todo el mundo se ha referido a él como "Marey" o "Segundo Marey". Todos... excepto Amedo, que se refería siempre a él por su segundo apellido, "Samper".

Lo resaltó Melchor Miralles en la serie *"Así se crearon los GAL"*, publicada en el diario *El Mundo* los últimos días de 1994, en la que recogió unas muy detalladas confesiones de Amedo y Domínguez. En efecto, en el ejemplar del 28 de diciembre, Miralles anotó extrañado que, al hablar de Marey, Amedo «siempre se refiere a él mencionando su segundo apellido, Samper».

Hoy día, Amedo sigue afirmando que su secuestro fue sólo un «error relativo», cuando sabe de sobra que la metedura de pata fue de escándalo. Y otro tanto insinuó de manera infame el ex-Presidente Felipe González, sabiendo como sabe muy bien que destrozaron la vida a una persona que no tenía absolutamente nada que ver con ETA. También sabe a quién querían secuestrar, por supuesto.

La infame insinuación respecto a Segundo Marey la hizo en una famosa entrevista que concedió a Juan José Millás en la que, muy significativamente, trató de «detenido» al secuestrado Marey y de «secuestrados» a los cuatro policías españoles detenidos por intentar secuestrar a Joxe Mari Larretxea que se libró por los pelos de terminar como los refugiados Lasa y Zabala. Y como hubiese terminado Marey de haber sido "el tesorero de ETA" que daban por seguro que era cuando lo secuestraron.

Felipe González pretendió en aquella entrevista, publicada en el diario *El País*, que en su día supieron dónde y cuándo se iban a reunir los miembros de la cúpula de ETA, pero que los franceses entonces rehusaban detenerlos. Por eso, según él, «en aquel momento solo cabía la posibilidad de volarlos a todos juntos en la casa en la que se iban a reunir [...] La decisión es sí o no. Lo simplifico, dije: no». Es decir, que, según González, dejaron escapar a la cúpula de ETA completa, lo cual no se lo puede creer nadie.

El ex-Presidente puso especial énfasis en situar el episodio años después de que los GAL dejaran de actuar («quizás en 1990 ó 1989»), pero aunque hubiese sido bastante antes, está más que probado que la Policía francesa no sólo estaba entonces plenamente dispuesta a detener a altos responsables de ETA, sino que ya

lo había hecho en múltiples ocasiones.

Por ejemplo, entre 1984 y 1986, época de pleno terror GAL-oso, detuvo a prácticamente todos los principales responsables de ETA en aquella época: *Txomin* Iturbe, *Antxon* Etxebeste, *"Azkoiti"*, *"Txikierdi"*, *"Mamarru"*, Peio Ansola, Juanra Aranburu… Y después, la colaboración entre París y Madrid al respecto no hizo sino acrecentarse.

Por lo tanto, lo que contó Felipe González en aquella entrevista no puede ser sino falso, empezando por su pretensión de que descabezando a ETA «habría habido 200 muertos menos», ya que el descabezamiento de ETA en Bidart, en marzo de 1992, no produjo dicho efecto, ni mucho menos. Además, una acción semejante hubiese puesto en muy serio peligro la colaboración del Gobierno francés que era primordial para el español.

Lo más probable es que sucediera lo que cuenta Amedo en su libro *"Cal viva"*, en las páginas 34 y 35. Él también pretende que tuvieron localizada a la cúpula de ETA en un caserío de Iparralde, en Idauze-Mendi, donde en febrero de 1984 asesinaron al refugiado Eugenio Gutiérrez Salazar. Y explica que «Si no se voló a la cúpula de ETA en Idaux-Mendy, y lo puedo confirmar porque yo estaba metido en la operación, fue sencillamente por los problemas que acarreaban la ubicación, el entorno y la huída posterior».

Nótese que eso sucedió cuando se empezaron a cometer los asesinatos reivindicados usando las siglas GAL, y no desde luego «en 1990 ó 1989», como pretendió González. Además, en aquel caserío no se reunió jamás cúpula alguna de ETA. Los que allí se encontraban eran una veintena de refugiados aprendiendo euskara. Amedo

dice que «en aparencia era una academia de euskara». Puede que en aquel entonces las Fuerzas de Seguridad creyeran que se trataba de una tapadera, pero no lo era. Ni por asomo.

El recordado periodista Javier Ortiz describió así a Felipe González: «Me pasma su desbordante, su infinita, su feraz -y feroz- producción de mentiras [...] y tanto miente que se ha vuelto adicto a la mentira, y miente incluso cuando no le hace falta para nada, puede que por el puro placer de mentir, o tal vez por irresistible y patológica compulsión falsaria».

Es un mitómano, sí, y entre tantas y tantas mentiras suelta a veces, o se le escapan, algunas medias verdades como la de que no aprobó que se volara la cúpula de ETA, cuando pudo haber decidido que así se hiciera. Una media verdad que dejó aún más en evidencia que fue él quien dirigió la guerra sucia de los GAL.

En la escala ética de Felipe González, sólo cabe la parte de verdad que le interesa y cuando le interesa, y ni siquiera esos datos son investigados por la Justicia española. Por eso es tan necesario un mecanismo independiente para la averiguación de la verdad que, entre otras cosas, investigue tanto las medias verdades que ha ido soltando o se le han escapado al señor X, como todo lo que con tanto empeño esconde tras su habitual retahíla de mentiras.

Se trata de una investigación en la que sin duda serán de gran ayuda los numerosos datos contenidos en el dossier sobre los GAL "*Les implications de l'Etat français*", publicado en forma de revista en diciembre de 1996 por Laguntza Herriaren Alde. Y también los que se mencionan en los cinco capítulos dedicados a "Los hombres de Amedo en Francia" en el libro *"Amedo: el Estado contra ETA"*. Y

tantos otros repartidos en sumarios y hemerotecas.

Hay mucho que investigar, sí, y no sólo sobre la implicación española, porque las autoridades francesas también se encargaron en su día de que no se profundizara en la implicación del Estado francés[38] y está claro que escondieron no pocos hechos relevantes.

La Justicia francesa, por su parte, tampoco es que se destacara precisamente por su empeño en esclarecer quién movía los hilos de aquellas acciones de guerra sucia. Muy en especial, el juez Michel Svahn que dejó escandalosamente en libertad a no pocos mercenarios, pretextando vicios de forma, defectos de procedimiento, y similares, y al que se menciona numerosas veces en el libro *"Amedo: El Estado contra ETA"*.

Por eso es tan necesario que se investigue a fondo todo aquello. Una investigación que debemos a todas las víctimas como Segundo Marey quien, antes de morir, resaltó que «No hay nada más horrible que desconocer la verdad» y que por ello «Se debe aclarar toda la verdad de los GAL para que las víctimas de esas siglas dejen de sufrir y tengan una satisfacción personal y moral».

Esas siglas de los GAL, como todas las demás usadas en la guerra sucia, no eran sino pantallas para ocultar el terrorismo de Estado y son sus innumerables víctimas las que tanto necesitan aclarar toda la verdad. Lo necesitan con urgencia, porque sin esa verdad jamás podrán recibir la justicia y reparación, con garantías de no repetición, que les deben los estados español y francés. Ambos.

Ejecutores de la Guerra Sucia en Iparralde			
	1 **1975 – 1976**	**2** **1978 – 1981**	**3** **1983 – 1986**
Gobiernos España / Francia	Franquistas/UDF	UCD/UDF conservadores	PSOE/PS socialistas
Siglas utilizadas	ATE, Triple A… ninguna	BVE, AAA, GAE… ninguna	GAL ninguna
Policía, **Guardia Civil** **y Ejército**	Sebastián Pallega, Ramón Lillo… Cándido Acedo, Jesús Conde… Manuel de la Pascua, Andrés Cassinello…	Ballesteros, *Billy el Niño*… Félix Hernando, Manuel Pastrana… Rivera Urruti, Sáenz de Santamaría…	Amedo/Domínguez, *GALvarez*... Galindo, Acedo, Bayo, Dorado, Pastrana… Cassinello, Juan M. Rivera Urruti…
Mercenarios	André-Noël Chérid y Jay Salby, J. P. Chérid, Mario Ricci, Giuseppe Calzona…	Jean-Pierre Chérid, Calzona, Vladimir Vit, Ricci, Boccardo, hermanos Perret...	Jean-Pierre Chérid, portugueses, Hampa de Marsella y Burdeos…
Muertos	Marcel Cardona		Jean-Pierre Chérid
Armas y municiones	Mariettas compradas por la Policía española en USA.	Smith & Wesson compradas por Policía esp. en USA. Munición militar española	Armas compradas por el comandante Rafael Masa en Andorra. Munición militar española
Principales pruebas	Atentado contra Josu, Pallega-preso común, Mariettas…	Atentado contra *Antxon* Etxebeste, Caso Hendayais…	Caso Batxoki y Consolation, Caso Lasa-Zabala, Caso Marey…

Consecuencias de la Guerra Sucia			
	1 **1975 – 1976**	**2** **1978 – 1981**	**3** **1983 – 1986**
Acciones Iparralde	Muchas bombas contra librerías, restaurantes…	Algunas bombas en empresas y negocios de refugiados	Incendios contra negocios relacionados con refugiados
Secuestro-desaparición	*Pertur*	*Naparra*	Lasa y Zabala
Secuestros fallidos	Yolanda Izagirre	Arantxa Sasiain	Confusión con Marey *Txipi* Salegi, Larretxea
Muertos en Hegoalde	Dos de Montejurra, Iñaki Etxabe…	Cuatro de Alonsotegi, Saldise, Etxaniz…	Santi Brouard
Muertos en Iparralde	Varios intentos de asesinato: *Txomin*, Josu Urrutikoetxea, *Tomasón*...	8 (2 franceses, error): Agurtzane Arregi, *Argala, Korta, Periko, Usurbil*…	23 (8 franceses, error): *Txapela, Tomasón*, Xabier Galdeano, cuatro del Monbar…
Medidas contra los refugiados	Detenciones, deportaciones en la isla de Yeu, confinamientos en el norte de Francia…	Tras 2 primeros asesinatos, retiran estatus de refugiado, 30 detenidos y 7 entregados. Fuertes protestas del PS. No hubo más medidas.	Tras 2 primeros asesinatos, detenciones, confinamientos y deportaciones en terceros países. Después, además, extradiciones.

Notas

1. Egaña, I. *Euskal Herria y la Libertad, 1974-1976,* Txalaparta 1993, pp. 60-62.

2. González, M. *"El primer acto de Guerra Sucia"*, *El País,* 22/03/1998.

3. *L'Unité,* n° 174, 10.10.1975.

4. Laurent, F. *L'Orchestre noire,* Stock 1978, pp. 347-350.
Laurent, F. Calvi, F. *Piazza Fontana,* Mondadori 1997, Capítulo IX.

5. Wikileaks: 1976ALGIER00571_b 1976ALGIER00557 1976ALGIER00489 1976ALGIER00063 1976ALGIER00588 1976ALGIER00063_b 1976ALGIER00660_b

6. Laurent, F. Calvi, F. *Piazza Fontana,* Mondadori 1997, Capítulo IX.

7. *Liberation*, 14.01.1976

8. *Le Monde*, 24.02.1976

9. Cerdán, M. Rubio, M. *Lobo,* Plaza & Janés 2003, p. 39.

10. Egaña, I. *Diccionario Histórico-Político de Euskal Herria,* Txalaparta 1996, p. 603.

11. Etxauz, S. *Ere* n° 49 (20 a 27.08.1980) pp. 11-12.

12. Fuentes Gómez de Salazar, E. *El pacto del capó*, Temas de Hoy 1994, p. 51.

13. Díaz Herrera, J. Duran, I. *Los secretos del poder,* Temas de Hoy 1994, pp. 140-.

14. Morán, F. *España en su sitio,* Plaza & Janés 1990 p. 55.

15. Landaburu, G. *Cambio 16* n° 626 (28.11 a 05.12.1983) pp. 31-38.

16. Morán, S. *La cooperación hispano-francesa en la lucha contra ETA* p. 172.

17. Ibid. pp. 115 y 129.

18. *Egin*, 01.02.1995, pp. 9-11.

19. Díaz Herrera, J. Tijeras, R. *El Dinero del Poder*, Ed. Cambio 16 1991, pp. 290-.

20. Morán, S. *La cooperación hispano-francesa en la lucha contra ETA* pp. 115, 129.

21. G. Damborenea, R. *La encrucijada vasca,* Argos Vergara 1984, p. 234.

22. *El Mundo* 22.10.1995.

23. Jaúregui, F. Menéndez, M. A. *El Zapaterato,* Península 2010, pp. 293-294.

24. Díaz Herrera, J. *Pedro J. Ramírez, al desnudo,* Akal 2009, pp. 529-530.

25. Vincendon, S. *Liberation*, 27.06.2003

26. *Egin*, 25.07.1987, p. 7.

27. *Deia* 12.10.2008, p. 40. Entrevista a Ricardo Arqués.

28. *Amedo: el Estado contra ETA,* p. 281.

29. Ibid. p. 75.

30. Amedo, J. *Cal viva,* La esfera de los libros 2013, p. 92.

31. Ibid. p. 70.

32. Ibid.

33. Ibid. p. 71.

34. *Egin*, 22.10.1983, p. 3.

35. *Diario de Noticias* 20.10.2008.

36. *Punto y Hora de Euskal Herria* n° 325 (28.10 a 04.11.1983) p. 18.

37. Amedo, J. *Cal viva,* La esfera de los libros 2013, p. 78.

38. Etxauz, S. *Tiempo* n° 744 (05.08.1996) pp. 22-23.

Índice onomástico

Víctimas

Políticos y autoridades

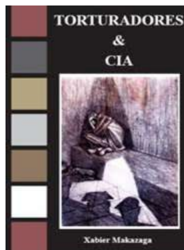
Policías y gendarmes

Ejército y Guardia Civil

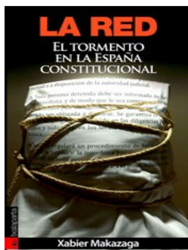
Mercenarios

Otras publicaciones del autor

- sobre la tortura:

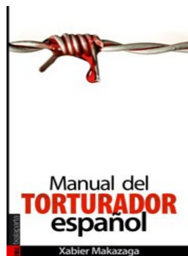


TORTURADORES & CIA
Santurtziko Torturaren Aurkako Taldea, 2008
199 páginas
Descargar el libro en formato PDF:
http://ttiki.com/114373



LA RED

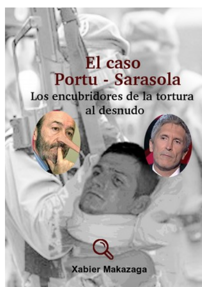
Txalaparta, 2008
262 páginas
Descargar fragmento (53 pag.) del libro
en formato PDF:
http://ttiki.com/90961



MANUAL DEL TORTURADOR ESPAÑOL
Txalaparta, 2009
210 páginas
Descargar el libro en formato PDF:
http://ttiki.com/90963



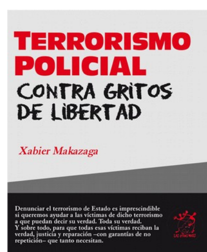
30 AÑOS DE TORTURA Y DEMOCRACIA
Matxingunea, 2013
114 páginas
Descargar el libro en formato PDF / ePUB / HTML:
http://ttiki.com/115597



EL CASO PORTU - SARASOLA
Los encubridores de la tortura al desnudo

Autoedición, 2015
188 páginas
Libro on-line y descarga directa:
http://ttiki.com/342145

- sobre la guerra sucia:



TERRORISMO POLICIAL
contra gritos de libertad

Hiru, 2015
242 páginas
Compar on-line:
http://ttiki.com/342147

Textos de Xabier Makazaga en:

Berria [eu] : http://tinyurl.com/lb8q6xu

Gara [es] : http://ttiki.com/114397

Boltxe [es] : http://ttiki.com/114405

Euskal Herria, 2015eko urria



Egia, justizia, erreparazioa